

JOSE RAFAEL SERRES

ACADEMICO DE NUMERO



TRABAJO RURAL
y
ZOOPROFILAXIS

SOCIOLOGIA Y LEGISLACION



COMUNICACION PRESENTADA
EN LA SESION DEL 30 DE JUNIO DE 1965



ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA
BUENOS AIRES

1965

ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA

Buenos Aires - Arenales 1678

*

MESA DIRECTIVA

<i>Presidente</i>	Ing. Agr. José María Bustillo
<i>Vicepresidente</i>	Dr. José Rafael Serres
<i>Secretario General</i>	Dr. Osvaldo A. Eckell
<i>Secretario de Actas</i>	Dr. Alejandro C. Baudou
<i>Tesorero</i>	Ing. Agr. Eduardo Pous Peña

ACADEMICOS DE NUMERO

Dr. Arena, Andrés R.
Dr. Baudou, Alejandro C.
Ing. Agr. Burkart, Arturo E.
Ing. Agr. Brunini, Vicente C.
Ing. Agr. Bustillo, José María
Dr. Candioti, Agustín N.
Dr. Cárcano, Miguel Angel
Ing. Agr. Casares, Miguel F.
Dr. Eckell, Osvaldo A.
Dr. Fernández Ithurrat, Edilberto
Dr. García Mata, Enrique
Ing. Agr. Ibarbia, Diego J.
Dr. Newton, Oscar M.
Ing. Agr. Ortega, Gabriel O.
Ing. Agr. Parodi, Lorenzo R.
Dr. Pires, Antonio
Ing. Agr. Pous Peña, Eduardo
Dr. Quiroga, Santiago S.
Ing. Agr. Ragonese, Arturo E.
Dr. Rosenbusch, Francisco
Dr. Rottgardt, Abel A.
Ing. Agr. Sauberan, Carlos
Dr. Schang, Pedro J.
Dr. Serres, José Rafael
Dr. Solanet, Emilio
Ing. Agr. Zemborain, Saturnino

S U M A R I O

	PÁG.
—Trabajo rural y zooprofilaxis	7
—Educación sanitaria	10
El pensamiento en las esferas oficiales	11
Más graves manifestaciones	11
A propósito de la deserción escolar	12
El olvido de la ley nacional N° 1.420. La obligatoriedad es colar	13
—Las voces del exterior. Recomendaciones	14
Analfabetismo y alfabetización	15
Capacitación rural	16
—La salud moral y física del trabajador rural y la educación pú- blica fundamental	18
—Asesoramiento	20
La Escuela Primaria Obligatoria y la Conciencia Rural ..	21
Legislación previsoras	22
—El Magisterio	23
Mientras tanto	24
—Protección legal del trabajador rural. Responsabilidad por Ac- cidentes del trabajo y Enfermedades profesionales. Ley N° 9688	27
Ley N° 12332/1935 y Ley N° 12631/1940	28
—El Seguro. Seguro de vida colectivo. Ley N° 16600/1964	29
—Enfermedades profesionales	30
Enfermedades ocasionales	31
—Estatuto del peón	35
A propósito de la higiene del trabajo	37
De la reglamentación. Personal comprendido y personal ex- cluído	38

—Ley N° 13020/1947	39
—Estatuto del tambero	41
—RECOMENDACION	42
Breves fundamentos de la precedente recomendación	43

A P E N D I C E

—Del Congreso del Profesorado Argentino, realizado en la Capital Federal, en 1940	45
—Soluciones americanas recomendables. La “Escuela Consolidada” norteamericana y canadiense	49
—Del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires	51
—Seguro de vida colectivo para el personal rural permanente ..	53
—Ministerio de Educación y Justicia. Programa nacional intensivo de alfabetización y educación de adultos	56

TRABAJO RURAL Y ZOOPROFILAXIS

*

SOCIOLOGIA Y LEGISLACION

Como muy bien ha sido aquilatado, en ambientes semejantes al nuestro, el estudio de las fuerzas y condiciones de la vida rural como base de una acción compensadora, desarrollando y manteniendo una civilización suficiente y eficiente en el campo, concieren a la Sociología Rural. A ello responde, pues, la primera parte de esta exposición.

Bien reconocido está que el campo argentino es una verdadera mina proveedora de materias primas, que hace a la vida misma del hombre, al serlo para la vida económica de la Nación.

Del campo argentino proviene —como se repite frecuentemente, con entera verdad— no menos del 95 por ciento de los recursos financieros que recibimos del exterior, como retribución por los bienes agropecuarios exportados.

Por todo ello hay que cuidarlo con inteligencia y decisión, so pena de determinar un resultado opuesto al deseado legítimamente.

De voces lejanas y más cercanas.

Sabiamente dijo Washington alguna vez, que no sabía de empresa alguna con la cual se pueda rendir a un país servicios más reales e importantes que la de mejorar su agricultura, sus planteles de animales útiles y otras ramas que exigen la atención del hombre de campo.

Pensamiento coincidente al respecto expresó Roosevelt,, en su hora, con estas palabras:

“Jamás nación alguna ha alcanzado una grandeza estable, si su grandeza no se ha basado en el bienestar de la clase agraria, de los hombres que viven del trabajo de la tierra, porque sobre su bienestar material y moral descansa, en último término, el resto de la Nación”.

Los problemas que tienen su raíz en el trabajo rural o, más específicamente, en la actividad agropecuaria, adquieren, pues, una importancia indiscutible, que reclama nuestra especial preocupación.

Desde ya debemos decir que en el mundo civilizado existe el convencimiento de que “el hombre no obtiene hoy día todo el rendimiento de que son capaces sus tierras”. Esta manifestación ha sido hecha en el Congreso Mundial de la Alimentación, realizado en Washington, en el año 1963.

Se requiere, por lo tanto, fomentar la *capacitación* de un gran sector de productores y de sus colaboradores.

Es de aplicación al caso, en todo el mundo, el viejo aforismo francés que nos dice: “Tanto vale el hombre, tanto vale la tierra” ¹.

Y como estímulo para la obra, también aquella inscripción que se encuentra en la entrada de la Escuela Nacional de Agricultura de Grignon, en Francia, donde hizo sus estudios el primer ingeniero agrícola argentino D. Eduardo Olivera, y que dice así: “El suelo es la Patria, cultivarlo es servirla” ², concepto adoptado aquí como lema por nuestra Sociedad Rural Argentina, y que exhibe en el local de exposiciones de Palermo, así: “Cultivar el suelo es servir a la Patria”.

El propietario del establecimiento rural, el “empresario rural”, es el “primer obrero” de la “empresa”, y de él depende el bienestar propio y el del personal que lo secunda.

Pero la verdad es también que como los sistemas productivos, impulsados por el progreso tecnológico, se van modernizando de modo continuado, y mucho más rápidamente que en el pasado, correlativamente aquéllos —los colaboradores, los obreros— deben poseer más elevadas aptitudes y cualidades profesionales.

De ahí la necesidad de una mayor dedicación para su instrucción básica, o sea de la “educación primaria” ante todo, y posteriormente

¹ “Tant vaut l'homme, tant vaut la terre”.

² “Le sol est la Patrie, le cultiver c'est la servir”.

la etapa de “capacitación” o preparación especial, que ya va asomando en nuestro ambiente rural,

No se ignora que del campo proviene, en gran parte, la buena salud del pueblo argentino, puesto que el problema primario de la Salud Pública reside en la NUTRICION de ese pueblo, que la tierra provee mediante la “agricultura” y la “ganadería”³.

En síntesis, la NUTRICION comienza en el suelo, en la tierra misma. De ahí que cuanto se haga para favorecer —como bien se lo merecen— las actividades agropecuarias, vale decir “el trabajo rural”, ello repercutirá provechosamente sobre la NUTRICION, y por lo tanto sobre la Salud Pública, sin la cual la colectividad no sólo no podría progresar, sino que retrocedería.

Oportuno es recordar, a propósito de la salud física, el juicioso concepto que la historia atribuye a Disraeli, el famoso estadista ministro de la reina Victoria, de Gran Bretaña, expresado del modo siguiente:

“Una nación no es fuerte sino en tanto los individuos que la componen son sanos y robustos. Poco importan su riqueza, la población de sus ciudades, la potencia de sus ejércitos de mar y tierra; si la salud de su pueblo declina, aquélla no tardará en perecer y en desaparecer”,

“En síntesis: un país sin buena salud es un país vulnerable”.

Y nosotros podemos agregar que sin zooprofilaxis —“sin extremar nuestra sanidad animal”, como lo reclaman las más importantes entidades rurales argentinas— no habrá producción económica, ni completa Salud Pública.

*

Debemos aplicar ahora, concretamente, lo que acabamos de exponer, a nuestro trabajador rural, agropecuario, o sea a procurar la protección de su salud, para que pueda realizar la obra que de él se espera.

Muy numerosas son las enfermedades transmisibles de los animales al hombre sobre todo en el campo. Entre ellas están, como más frecuentes en nuestro ambiente rural, la tuberculosis, la brucelosis,

³ Estas son ‘las dos grandes mamás con que la madre-tierra alimenta al mundo famélico’, según la gráfica expresión del duque de Sully, ministro consejero del rey Enrique IV, de Francia.

la hidatidosis, el carbunclo, la triquinosis, la psitacosis, etc., etc.; respecto de las cuales es necesario y posible proteger al “trabajador rural”.

Pero para hacerlo es necesario “saber”, tener un conocimiento suficiente respecto de dichas enfermedades, y ello concierne, conjuntamente, a los empresarios rurales —en la estancia, chacra, granja— y al personal empleado en esas actividades.

Con esta protección se podrá producir, en las mejores condiciones cada vez *mayor* cantidad de alimentos y otras materias primas, de *mejor* calidad, y al *más bajo* costo, compatible con el merecido beneficio material y espiritual del empresario agropecuario y de sus colaboradores, y ventajas para el consumidor.

Asimismo se logrará de esta manera una feliz consecuencia en el terreno de la economía, como es el aumento de los saldos exportables, tan necesarios —como he dicho— para la satisfacción de las urgentes y grandes necesidades internas y más todavía en el exterior, como lo revela la Campaña Mundial contra el Hambre; así, obtendremos también las indispensables “divisas” para costear nuestras importaciones.

*

Educación Sanitaria.

La protección de la salud de las personas dedicadas a la producción agropecuaria requiere EDUCACION SANITARIA en el ambiente rural, dirigida primeramente a los “empresarios rurales”, y por su intermedio a sus colaboradores en todas las jerarquías.

En esta tarea deben intervenir con carácter permanente, los servicios oficiales de la materia, nacionales y provinciales, y también las entidades rurales difundidas en todo el país, en cumplimiento de una obligación moral indiscutible, y de la *legislación pertinente*, a que nos hemos de referir más adelante.

Pero, para que la indispensable educación sanitaria sea efectiva, habrá que terminar con el *analfabetismo* y la *ignorancia*, pues sino el destinatario de aquélla no podrá absorberla.

A esta conclusión se llegó, también en Washington, en 1963, cuando se realizó la “Reunión de Ministros Americanos de Salud Pú-

blica”, promovida por la “Organización Panamericana de la Salud” (O. P. S.), y de la que participó nuestro país,

Se debe reconocer que existe una gran diferencia, en nuestro país, entre el ambiente rural y el urbano; el trabajador rural está, por de pronto, en íntimo contacto con la naturaleza, cuyas leyes debe tomar en consideración para subsistir y progresar,

El Pensamiento en las Esferas Oficiales

En nuestro medio este aspecto del problema rural —que forma parte del problema general para el mayor progreso de la nación— tiene considerable importancia, y tanto que en el mensaje presidencial leído ante el Congreso al inaugurar el período ordinario de sesiones correspondiente al año 1964, se hizo referencia a “nuestra empobrecida escuela pública”, y a la “necesidad de que no siga marchando por la senda de la deserción escolar”. Informó, asimismo, que sobre tres millones de inscriptos en la escuela primaria “un tercio de los que cursan el primer grado inferior *lo repite*”, y que “hay en el país 1.200.000 analfabetos, y una cifra todavía más elevada de semianalfabetos”. También se hizo referencia a las necesidades de la edificación escolar, y a la justa remuneración —tantas veces postergada— de los educadores. Esto ha sido subrayado, recientemente, en circunstancias análogas.

Más graves manifestaciones.

A su vez en la oportunidad de iniciación del curso lectivo de 1964, el Ministerio del ramo, —en un acto conjunto con el Consejo Nacional de Educación— dirigió un meduloso mensaje a los docentes y alumnos, por conducto de la subsecretaria de ese departamento de Estado, reproduciendo conceptos universalmente aceptados, y formulando otras graves y desalentadoras manifestaciones respecto de la realidad local en materia educativa.

Se consideró a la educación “como una empresa productiva, en el mejor y más excelente sentido de esta palabra”, y que “los países que encabezan el mundo (U.S.A., Francia, Japón, Gran Bretaña, Rusia, etc.) han comprobado experimentalmente de qué manera y en qué medida se torna más productivo el trabajo, cuando el operario mejora su nivel de educación”. “En todos esos países hace ya largo tiempo

que la era de la improvisación en materia educacional ha tenido fin. Es hora de que también lo tenga en el nuestro...". Es hora de consultar el futuro antes de disponer el presente; es hora de prever; es hora de hacer planes, o, como se estila decir, de planificar".

"En los Estados Unidos se ha logrado prácticamente que el ochenta por ciento de la población complete doce años de enseñanza; en Francia se ha dispuesto la obligatoriedad escolar por diez años y se abre ampliamente el ciclo superior".

En cuanto al aspecto económico de la educación se declara que "sin la creación de un patrimonio o fondo reservado a la educación no se podrá concretar planeamiento alguno. Es necesario que las previsiones en materia educativa no se hallen sometidas a la angustia perentoria del ejercicio financiero, pues ello obsta a todo plan de largo alcance, a todo razonable cálculo de futuridad; y además obsta al empleo actual del dinero que requiere la puesta al día de *nuestra empobrecida escuela pública*".

"Si esta condición económica no se cumple, no alcanzaremos éxitos sustanciales, y la República proseguirá en la senda laxa de la deserción escolar y del virtual exilio de técnicos y universitarios".

La verdad es que los factores económicos y los culturales se encuentran ligados íntimamente; son interdependientes.

A propósito de la Deserción escolar

Mediante el mismo mensaje del Ministerio de Educación se declaró también lo siguiente: "Se nos van los niños de las escuelas y los adolescentes de los establecimientos secundarios; se nos malogran para el futuro de la Patria. No hablemos de porcentajes; baste recordar que son dolorosamente elevados".

"Sabemos las causas: la pobreza la desnutrición, los edificios inadecuados. Consideramos que una adecuada política en materia de escuelas-hogares, de vivienda escolar, de comedores estudiantiles, tiene que rendir frutos positivos y a corto plazo".

Al referirse editorialmente a informaciones del Departamento de Estadística Educativa del Ministerio de Educación y Justicia, "La Prensa" señaló (edición del 15-XII-1964) que el número de estudiantes inscriptos en el ciclo elemental va en aumento año tras año, pero que no son alentadoras las cifras que demuestran la evolución de los

educandos a través del ciclo primario. En efecto, el desgranamiento —la deserción escolar— en los siete años de la enseñanza elemental, es alarmante, pues de los niños inscriptos en el primer grado inferior, del 60 al 65 por ciento no llega al sexto grado.

Y se apunta, luego esta atinada reflexión: “Esta deserción tiene derivaciones económicas, sociales y políticas, porque esa enorme masa de niños que abandona la escuela sin terminar el ciclo de sus estudios, va a engrosar el núcleo, numeroso ya, de los semianalfabetos, generalmente más peligrosos, social y políticamente hablando, que los anal-fabetos absolutos”.

*El olvido de la Ley Nacional N° 1420.
La obligatoriedad escolar.*

De acuerdo con la Ley N° 1420, del 8 de julio de 1884, existe, sin embargo, la *obligación* de educar a los niños y niñas de 6 a 14 años de edad ⁴.

Pero, según ha sido señalado periodísticamente ⁵, “desde 1943 es algo raro que las autoridades escolares de todo el país, salvo alguna excepción, se ocupen de vigilar el cumplimiento, de las leyes escolares. Es por eso que ahora, y desde hace 20 años, los padres que no mandan a sus hijos a las escuelas públicas, oficiales o privadas, no tienen molestias de ninguna clase, ni nadie se acerca a ellos para preguntarles por qué proceden así, o para aconsejarles, o para obligarles a cumplir sus deberes familiares”.

⁴ Art. 1° — La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad.

Art 2° — La instrucción debe ser OBLIGATORIA, gratuita y gradual y dada conforme, a los preceptos de la higiene.

Art. 3° — La *obligación escolar* comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños, dentro de la edad escolar establecida en el art. 1°.

Art. 4° — La *obligación escolar* puede cumplirse en las escuelas públicas, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños; puede comprobarse por medio de certificados de examen, y exigir su observación por medio de amonestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear, en caso extremo, la fuerza pública para conducir los niños a la escuela.

Art. 20. — La falta inmotivada de un niño a la escuela, constante del registro de asistencia por más de dos días, será comunicada a la persona encargada del niño para que explique la falta. Si ésta no fuese satisfactoriamente explicada, continuando la falta, el encargado del niño incurrirá en el mínimum de la pena pecuniaria establecida en el art. 44, inciso 8°, aumentándose en caso de reincidencia hasta el máximun, sin perjuicio de hacer efectiva la asistencia del niño a la escuela.

⁵ La Prensa, 5-I-1964.

DE VOCES DEL EXTERIOR

RECOMENDACIONES

En la V Reunión del Comité Consultivo Intergubernamental, realizado en Brasilia a principios de marzo de 1964, la UNESCO había presentado un proyecto sobre "Extensión y Mejoramiento de la Educación Primaria en América Latina".

La República Argentina estuvo representada por la presidenta del Consejo Nacional de Educación, según la cual el informe final de la reunión destacó, diversos problemas que dificultan la realización de aquel proyecto. Entre ellos el planteado por el "bajo rendimiento de la escuela primaria, pues según los datos obtenidos en algunos países, sólo termina el ciclo primario el 22 por ciento de los inscriptos en el primer grado".

En nuestro país, a pesar de que ese porcentaje llega al nivel 35, está muy lejos de ser considerado satisfactorio.

Se señaló también la resistencia del magisterio a servir en las zonas rurales, por falta de estímulos y compensaciones, así como el insuficiente número de supervisores (inspectores) escolares; carencia de programas de protección escolar y social del educando, y la insuficiencia de los presupuestos de educación pública.

En la reunión a que nos estamos refiriendo se hicieron diversas y medulosas recomendaciones, destinadas a los estados miembros de la UNESCO. Entre ellas destacaremos las siguientes por su particular importancia para nosotros:

- Dar preferencia a proporcionar ayuda al escolar, para su protección biológica y social;

- Interesar a la población adulta en el problema del ausentismo y de la deserción escolar;

- Extender la duración del curso lectivo a no menos de 200 días hábiles de clases anuales con sesiones de 5 horas diarias;

- Prolongar la jornada escolar con actividades complementarias;

- Investigación de los problemas de deserción y repetición de cursos;

- Revisar los sistemas vigentes en la educación;

- Elaborar programas con bases científicas adaptadas a los diferentes ritmos del aprendizaje;

- Crear escuelas experimentales de nuevos métodos pedagógicos y didácticos;
- Evitar la incorporación prematura de los niños a la escuela;
- Elevar el número de años de estudio del magisterio;
- Revisar los programas de estudio de las escuelas normales;
- Vigorizar la práctica docente;
- Extender la preparación docente con el objeto de capacitarlos en enseñanza agrícola y técnico-industrial;
- Provisión de textos escolares y otros elementos a los alumnos;
- Mayor uso de la radiodifusión, televisión y cine con fines educativos;
- Recomendaciones a las universidades para que investiguen sobre educación primaria y otras tareas de supervisión, planeamiento y construcciones escolares.

*

*Del Presidente de Alemania Federal.
Respecto del Milagro Alemán.*

A propósito de los efectos de la educación pública, y con referencia al llamado “milagro alemán”, corresponde recordar que durante su estada en nuestro país a principios del mes de mayo de 1964, el presidente de Alemania Federal, doctor Heinrich Lübke, expresó lo siguiente: “Lo que explica el llamado milagro alemán es la capacidad y los conocimientos que el pueblo alemán tenía. Es por eso que hay que actuar intensamente en todos los sectores educacionales para que, dando oportunidades a quienes realmente tienen condiciones, la educación constituya la base del progreso económico. Con la educación vais a conseguir llevar adelante vuestra economía y mejorar el nivel de vida del pueblo”. Prudente reflexión, por cierto.

*

ANALFABETISMO Y ALFABETIZACION

Respecto de las circunstancias que conducen al analfabetismo, verdadero cáncer de la educación, se ha iniciado una reacción, en nuestras más altas esferas oficiales, mediante el cumplimiento de un “*plan de alfabetización*”.

En efecto, según la información periodística de mediados de abril ppdo., el primer mandatario inauguró un programa nacional intensivo de alfabetización y educación de adultos para el período 1964-1968, mediante la firma de dos decretos. Por uno de ellos se invistió de facultades para tal fin a los miembros de la Comisión Nacional de Alfabetización y Edificación Escolar, y por el otro se dictó la disposición presupuestaria que posibilita la puesta en marcha del programa conforme a la Ley N° 16.662, que otorgó para ello, al Ministerio de Educación y Justicia, mil millones de pesos.

Según lo expresó el Doctor Illia, en el acto realizado, la obra —que se dirige fundamentalmente a quienes no han podido concurrir a la escuela, sobre todo los adultos, para proporcionarles la posibilidad de alfabetización— se iniciará por de pronto, con más intensidad en algunos puntos del país.

De la Comisión que preside el ministro de Educación y Justicia, forman parte el secretario de Guerra, los presidentes de las comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, la presidenta del Consejo Nacional de Educación y el Secretario General de la Presidencia.

Mayor información sobre la materia va en el Apéndice.

Es de esperar que se cumpla la obra proyectada con tan elevado auspicio, para vencer tan grave mal, que perdura en nuestro país, no obstante existir la recordada “obligatoriedad escolar primaria”, hasta los 14 años de edad, que —como he dicho— impone la ley nacional N° 1420, pero que es letra muerta al respecto, puede decirse, para muchos.

CAPACITACION RURAL-

Se ha venido considerando con verdadero interés, en estos últimos tiempos, lo concerniente a la CAPACITACION RURAL, iniciativa que apoyamos decididamente, pero *como segunda etapa*, vale decir para cumplirla una vez asegurado el cimiento del edificio educativo rural, cimiento constituido por la “escuela primaria rural”, absolutamente indispensable para asegurar la *primera etapa* de la formación humana en el ambiente rural, como base para la protección ulterior en todos sus aspectos, protección de que tanto necesita el “trabajador rural”, a fin de obtener el resultado que de él se espera, y que pueda

rendir, en su propio favor y en el de la empresa agropecuaria a que se halla vinculado.

Ya en las II Jornadas de Sociología Rural, que se cumplieron en Tandil, provincia de Buenos Aires, en 1958, en la Escuela Superior Agraria Femenina (Eduardo Olivera), organizadas por dependencias técnicas del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, se exteriorizó la necesidad de adoptar medidas apropiadas: *Medidas inmediatas*, a fin de lograr la capacitación necesaria para obtener la colaboración del magisterio rural en toda tarea de investigación y difusión de conocimientos en el campo.

Y medidas *mediatas*, para dar una mayor orientación social a las escuelas de capacitación agraria de maestros rurales, tomándose como ejemplo la escuela que funciona en Tandil, "para que constituyan Centros formadores en educación fundamental".

Otra Escuela.

Recientemente, el 1º de abril ppdo., fue inaugurada, en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, el establecimiento que se denominó "Primera Escuela Rural de Capacitación", creada con el apoyo moral y material de la "Fundación Sociedad Rural Argentina", y que contó con el auspicio de autoridades educativas y agropecuarias de la Nación y de la Provincia.

En dicho acto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Sr. Faustino Fano, destacado ruralista, expresó conceptos ponderables. Dijo, entre otras cosas, que la entidad "cumple con los fines y propósitos que le fijaron sus fundadores en 1866, escritos en el art. 1º de su estatuto, que le impuso lograr el *mejoramiento* de la vida rural en todos sus aspectos".

Y, también, "que el mundo moderno rechaza al obrero empírico, y exige que la inteligencia actúe preponderantemente en el adelanto científico y tecnológico, para volcarlo en beneficio de la sociedad. La enseñanza técnica, desde luego con base científica y también cultural, es la que debemos impartir a la juventud, para darle mayores oportunidades y condiciones más favorables para desempeñarse y elevar su condición económica y social, con lo cual mejorará el nivel económico del país". Agregó, igualmente, que "ya no es posible cultivar la tierra con métodos primitivos, ni pueden tampoco los hombres de campo vivir en el aislamiento de una supina ignorancia. La tecnifi-

cación del campo requiere, en primer término, la *tecnificación del hombre*. No otra cosa podemos pretender hacer al proponernos contribuir a la capacitación de nuestra juventud”.

Los cursos deben desarrollarse a partir de este año, con tres de duración, de tres clases semanales, de tres horas cada una.

Los programas de estudios han sido divididos en cuatro partes: en la primera, conocimientos generales de idioma nacional, matemáticas y contabilidad, ciencias naturales y culturales; en la segunda primeros auxilios, La tercera parte comprende estudios de agricultura, ganadería, lechería, apicultura y avicultura, desarrollados sobre la base de conocimientos técnico-prácticos, y por último, la cuarta parte corresponde a educación física.

Le auguramos el merecido éxito.

LA SALUD MORAL Y FISICA DEL TRABAJADOR RURAL Y LA EDUCACION PUBLICA FUNDAMENTAL.

Para que la Educación Sanitaria, proveedora del mejor trabajo rural, surta el efecto deseado, es absolutamente necesario preocuparse de su cimiento, o sea de la “escuela primaria rural obligatoria”; así la familia rural alcanzará el nivel que merece.

La familia rural o agraria, que es la UNIDAD PRODUCTORA RURAL, merece ser observada a fondo, a fin de colocarla en las mejores condiciones para realizar TRABAJO EFICAZ. *Trabajo y bienestar deben ser solidarios.*

El relativo aislamiento en que vive para los tratos sociales, las escasas facilidades para la educación de los hijos, la frecuente carencia de elementales conocimientos técnicos, la falta de asesoramiento para efectuar el mejor trabajo, etc., son —con no pocos otros— serios inconvenientes con que tropieza aquella “unidad productora” en su ambiente, lo cual da cabida al desaliento.

Y, sin embargo, tiene el derecho de exigir que los gobernantes se ocupen de su existencia, tanto —por lo menos— como se ocupan de la de aquellos que viven en los ambientes urbanos.

Se debe acelerar la obra de mejoramiento de su vida en el campo, si se quiere retener a aquella familia, y a sus colaboradores, en el medio rural. ¿Con quién o con qué se la reemplazaría si se redujese más todavía en cantidad y calidad, frente a las necesidades generales de la Nación? ¿Quién se encargaría de colaborar en la provisión de los alimentos, de las materias primas para la industria fabril, etc., etc.,?

¿Qué se debe hacer para modificar ese estado de cosas,

El crecimiento mayor de las ciudades es un fenómeno moderno común a todos los países civilizados, pero si las condiciones de vida rural fuesen más amables, más humanas, el progreso de la población en ese medio no sería tan lento, y el lamentable y comprobado éxodo determinado por aquella circunstancia, se vería contenido o reducido sensiblemente.

Ante todo se debe procurar *estabilizar a la "familia rural"* en su ambiente, para lo cual es necesario que la SOCIEDAD le asegure un mínimo de condiciones favorables. En primer término se requiere asegurarle, con aquel propósito, TRABAJO PERMANENTE, en condiciones humanas, y RETRIBUCION JUSTA del mismo,

La RETRIBUCION debe satisfacer por lo pronto, las necesidades vitales de quien realiza el trabajo. Las posibilidades de mejoramiento económico son un incentivo para la capacidad productiva y el empeño de superación.

Simultáneamente se requiere SEGURIDAD para las personas y para los bienes, e igualmente efectiva PROTECCION SANITARIA GENERAL y, particularmente, de la maternidad, para la natural atención de la madre y del niño en el campo.

Correlativo de este factor es el de la VIVIENDA del trabajador y de la familia rural, que les proporcione un mínimo de comodidades compatibles con la dignidad humana, que haga más amable la vida en el campo.

Lo concerniente a este último factor fue considerado con la mayor atención en la Conferencia Latinoamericana sobre Agricultura y Alimentación, realizada en Viña del Mar (Chile) con el auspicio de la F.A.C., en el mes de marzo ppdo.

Según un documento, presentado por la F.A.O., y referido a "América Latina, "en gran parte de las regiones estudiadas, las viviendas se encuentran en condiciones comparables con las peores del mundo".

Nuevamente la EDUCACION RURAL

Y coronando estos factores, corresponde insistir una vez más, acerca de la ESCUELA RURAL, educadora de la niñez rural primordialmente. Este es un factor inseparable de los mencionados precedentemente entre los que concurren para el BIENESTAR en el campo.

Mediante ella se asegura el derecho a la CAPACITACION, que ya hemos señalado, pues el mejoramiento de la condición humana—física y espiritualmente— es una aspiración y una necesidad para lograr una mejor realización del trabajo agropecuario, y una penetración con la trascendencia de la “empresa” a que el trabajador, y su familia, están ligados.

A la COLECTIVIDAD en cuyo seno viven esos elementos humanos le incumbe favorecer, estimular, su esfuerzo para EDUCAR a sus hijos, y para que aquéllos también puedan perfeccionarse.

*

ASESORAMIENTO

¿Qué debe hacer el ruralista agropecuario, dónde y cómo debe hacerlo, para obtener de su trabajo el mejor fruto. Ante todo se requiere ASESORAMIENTO.

Se debe propender a que el hombre de campo pueda producir, o colaborar eficazmente en la producción de lo que más se pide y mejor se paga. Sin embargo, es muy compacta la falange de los que necesitan asesoramiento personal, individual, constante, sin el cual no se logrará que la “empresa rural” dé los frutos que debe rendir, y que el país espera, si es conducida racionalmente.

Correlativamente se requiere, para la debida eficacia del asesoramiento, que su destinatario sea capaz de recibir y absorber convenientemente el consejo, para lo cual debe haber alcanzado cierto nivel de cultura.

De ahí la importancia de la Escuela Primaria *VERDADERAMENTE RURAL*, y del *aprendizaje ulterior* de los adolescentes que ya cumplieron con la obligación escolar primaria, todo lo cual habrá de completarse en los adultos.

En síntesis, lo que se debe resolver es un *problema de CULTURA*.

Tengo el convencimiento de que, en nuestro medio, ninguna reforma social fundamental podrá pretender resultados satisfactorios, si no comienza por la ESCUELA PRIMARIA (que es la ESCUELA DEL PUEBLO), sobre todo por la ESCUELA DEL CAMPO, o ESCUELA RURAL, para desterrar la rutina imperante, verdadera PLAGA RURAL.

La educación pública obligatoria debe —además de llenar discretamente su misión de CULTURA GENERAL— estar vinculada íntimamente con las actividades que constituyen la amplia base económica de la Nación, o sea con la Producción Rural.

*La Escuela Primaria Obligatoria
y la
CONCIENCIA RURAL*

La escuela pública obligatoria debe despertar, desde temprano, en los espíritus escolares y para fortalecerla en el período post-escolar, la CONCIENCIA RURAL, la conciencia de los recursos en que se basa el engrandecimiento nacional, fomentando su simpatía, su afición por las cosas de la TIERRA RURAL. Debe poner al escolar en posesión de aquellos sencillos elementos de la ciencia que le permiten explicarse los fenómenos más frecuentes que ocurren cerca de su persona, a la vez que por éste y otros medios se despierta y dirige su interés en los trabajos del campo, y en los múltiples incidentes de la vida rural, incluídos los que se refieren a su salud.

El escolar será así el puente entre la escuela —positivamente educadora— y los padres de los educandos. Sólo así esos padres se verán impelidos a persistir en el esfuerzo y aún en el sacrificio que puede significarles la concurrencia de los hijos a la “escuela obligatoria”; de esos hijos que son, muchísimas veces, y desde temprana edad, sus colaboradores indispensables en la dura lucha diaria por la vida.

Pero, lamentablemente, se ha venido olvidando lo que significa el campo para la nación; se ha olvidado la realidad argentina, no se ha sabido mirar el país hacia adentro.

El fomento de la vocación hacia el campo, la especial atención escolar en ese aspecto, contribuirá, asimismo, a ARRAIGAR la población rural, factor que permitirá mantener, simultáneamente la indispensable cohesión de la familia campesina, pues procurando rete-

ner a los muchachos y a las muchachas para el trabajo del campo, encontrarán éstos allí las fuerzas necesarias para no ceder ante las atracciones del “pueblo”, de la “ciudad”.

Legislación Previsora.

No ha faltado la legislación previsora, sin embargo, pues la ley orgánica nacional de educación primaria N° 1420, del año 1884, manda impartir NOCIONES DE AGRICULTURA y de GANADERIA a los varones, en las escuelas. Esta disposición, notoriamente previsora, fue ratificada mediante la N° 4874, llamada “Ley Lainez”, de 1905, creadora de “escuelas primarias nacionales en las provincias”, pero la verdad es que aquella enseñanza sigue siendo sólo una aspiración; igualmente por parte de las provincias mismas.

Es que se habla de “escuela rural”, pero esta designación no se ha visto justificada, comúnmente, nada más que por la ubicación —y muchas veces deficiente— de esa escuela en el ambiente rural, en el campo, pues la enseñanza que allí se imparte es de TIPO URBANO, ya que no ha sido amoldada a las necesidades del ambiente, ni le han sido provistos los elementos pedagógicos indispensables, NI LOS EDUCADORES IDONEOS, por lo menos en la medida necesaria.

No puede darse carácter RURAL a una escuela con sólo ubicarla en el campo, en el despoblado. Las “escuelas rurales” deben ser esencialmente escuelas de “decir y hacer”; y para que las nociones agropecuarias sean eficazmente impartidas, es necesario SALIR DEL AULA, contando con adecuados elementos de demostración.

De una manera general la enseñanza sobre el particular, en la escuela primaria rural, debe comprender una parte teórica y otra práctica; esta última debe desarrollarse en el terreno escolar anexo a las aulas. La parte teórica debe comprender el estudio de la naturaleza, con sus vegetales, animales domésticos, cultivos, suelos, estableciendo los principios fundamentales de la vida animal y vegetal, sus relaciones entre sí, y la de éstos con el ambiente.

Ese estudio teórico debe tener por complemento el trabajo en el terreno escolar, donde se cultiven flores, plantas ornamentales, legumbres, etc., y se hagan demostraciones prácticas sencillas acerca de las leyes de la germinación, de los principios fisiológicos de la vida vegetal y animal, sobre propiedades físicas del suelo, etcétera.

No pueden satisfacernos los aislados, aunque favorables, ejemplos que pueden citarse, pues lo que se requiere es que ésa sea la tendencia general de la educación en el campo, que dé a toda la población escolar rural el sentido, la CONCIENCIA RURAL propia de la economía argentina, en lo que tiene de indiscutiblemente fundamental.

En cambio, al imbuirlos de principios y conocimientos de tipo exclusivamente urbano, esa escuela pseudo rural sustrae a los educandos de su ambiente, que es el de las tareas rurales, contribuyendo así a desargentinarlos, y conspirando en favor de la huida hacia el pueblo, hacia la ciudad.

EL MAGISTERIO

Pero, para imprimir la necesaria ENSEÑANZA RURAL se requiere, por lo tanto, que los docentes de esas escuelas —maestros y maestras— posean un mínimo de conocimientos agropecuarios y de economía rural aplicables, de que han carecido hasta ahora en su mayoría, pues los aspirantes al magisterio no reciben en las escuelas normales comunes la preparación necesaria para alcanzar aquella finalidad u orientación de acuerdo con la realidad argentina. Esto también ha sido reconocido en las esferas oficiales, desde mucho tiempo atrás, pero es insuficiente lo que se ha hecho para subsanar tan grave y fundamental defecto. Nos referimos a la creación de Escuelas Normales de Maestros Nacionales Regionales, distribuidas en algunas provincias, pero de cuyos resultados no existe información pública todavía, no obstante el gran interés que existe en conocerlos.

Es innegable que el docente del campo necesita saber tanto como el de las ciudades, pero también necesita saber otras cosas y de otro modo.

De ningún modo pensamos que el futuro maestro rural deba realizar un estudio profesional agropecuario; pero sí que debe adquirir el bagaje de conocimientos teóricos y prácticos, de agricultura y de ganadería y derivados, que habrá de transmitir a los educandos de las escuelas primarias rurales.

Correlativamente, ese docente deberá ser acreedor a la máxima consideración y remuneración, y estar libre de trabas para llegar a las más elevadas funciones en la órbita educativa.

Concretando: EL CAMPO ARGENTINO REQUIERE EL MEJOR MAESTRO Y EL MEJOR REMUNERADO.

Estaría bien que, con el propósito de argentinizar al máximo la preparación del magisterio en las escuelas normales comunes, se revisase el plan de estudios de dichas escuelas, para introducir la enseñanza ausente, sin recargar dichos estudios, y de manera que ese magisterio pudiese aprender a mirar hacia el interior del país, y, por lo tanto, a conocerlo mejor. Así podría, a su vez, transmitir a sus futuros educandos nociones claras acerca de la economía argentina en todos sus aspectos, con lo cual ejercería una saludable influencia contra la fatal y explicable tendencia burocrática, y se enseñaría a no mirar con menosprecio y hasta con hostilidad, tal vez, a cuanto se refiere al campo.

Pero la preparación ruralista del magisterio no puede adquirirse mediante el simple agregado de alguna asignatura a los cursos normales del presente; sin embargo, ése es el expediente que se ha pretendido adoptar, pero que de ningún modo puede satisfacer.

Es necesario no olvidar que los sistemas educativos valen fundamentalmente lo que valen los maestros.

Mientras tanto.

Puede hacerse buena obra desde ya. Mientras lo propuesto no sea una realidad, los docentes que se hallan en funciones actualmente pueden cumplir una obra muy provechosa si se atiende a su mejor ilustración para ese efecto, proporcionándoles conocimientos adecuados mediante monografías especiales, información radiotelefónica sistemática, y sobre todo cursos breves de vacaciones sobre temas seleccionados, con la colaboración local de todos los elementos de que el país está en condiciones de disponer con esa finalidad, entre los cuales se encuentran los institutos superiores de Agronomía y de Veterinaria, las escuelas de Agricultura y de Ganadería, las entidades rurales de productores y los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y de departamentos análogos provinciales, etc.

Ya se inició esa obra, por mi iniciativa, durante el verano de 1942/1943 —y se hace actualmente— en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, donde un importante núcleo de docentes de la educación primaria, de ambos sexos, siguió un curso ad hoc. Pero es necesario que ese beneficio alcance a TODOS los maestros del país; para ello será preciso coordinar urgentemente los medios disponibles para cumplir la obra, bien ARGENTINA, por cierto.

Quienes tienen a su cargo el gobierno inmediato de la educación pública obligatoria deben dar la sensación de que aquilatan, con plena conciencia, la situación educativa del país, ofreciéndole provechosas soluciones para el presente y para el futuro; el perfeccionamiento se irá alcanzando poco a poco. Debemos ahorrar palabras y ofrecer hechos.

Este será el mejor homenaje que podremos tributar a nuestros próceres, en el Sesquicentenario del Congreso de Tucumán y de la Declaración de la Independencia, que se conmemorará en 1966.

*

Veamos ahora lo concerniente a la Protección Legal del Trabajador Rural, en su vinculación con la salud física del mismo, como consecuencia de la legislación especial en vigor.

5

PROTECCION LEGAL DEL TRABAJADOR RURAL
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
LEY N° 9.688

La ley N° 9.688 fue sancionada el 11 de octubre de 1915, y consta de 40 artículos.

Esta ley vino a llenar un vacío, respondiendo a una verdadera necesidad social.

El Código Civil no previó el “accidente del trabajo”. Sólo se refiere, en general, a todos los casos en que se origina un daño o perjuicio, sea por negligencia, culpa o hechos delictuosos, y tanto por los actos de las personas como por cosas inanimadas o por animales.

Este es el concepto expresado por el artículo 1109 del Código Civil.

Alegándose la culpa o negligencia del patrono, el trabajador podría ser indemnizado de las consecuencias de un accidente, pero probando los hechos y la culpabilidad de dicho patrono.

En esto ha radicado toda la dificultad del trabajador durante años, para ser reparado civilmente por los daños sufridos.

La ley N° 9.688 ha venido a modificar la difícil situación de la víctima, asegurando de antemano que en todo accidente del trabajo el patrón es responsable, aunque no se pruebe su culpa o negligencia.

Esta ley no es sólo ampliatoria del Código Civil, sino también modificatoria o derogatoria de las disposiciones en contrario de éste.

La ley N° 9.688, profundamente humanitaria, tiene una doble finalidad, expresada en los artículos 1° y 29°: la inmediata, de establecer la *responsabilidad* de los empleadores por los accidentes ocurridos a su personal en determinadas actividades y circunstancias; y

la mediata, de indicar las *medidas* que deben adoptarse para prevenir accidentes en todo trabajo en que haya peligro para el personal.

La ley, de preceptos imperativos, tiene el carácter de “orden público”, afirmado por el Art. 23, al disponer la absoluta nulidad de toda cláusula que exima al patrono de responsabilidad por los accidentes que se produzcan, o que por cualquier concepto resultare derogatoria de la ley.

Sin embargo, era limitada en sus alcances en cuanto a las personas en sí, pues sus beneficiarios no eran todos los asalariados, sino los expresamente determinados en los siete primeros incisos del artículo 2º, o sea, concretamente, los obreros de la industria fabril, de las construcciones, de las minas y canteras, del transporte, de los inflamables y de la electricidad; y también de las explotaciones forestal, agrícola, ganadera y pesquera. Respecto de las explotaciones forestal y agrícola era “sólo para las personas ocupadas en el transporte o servicio de motores inanimados”; quedaban así excluidos todos los demás trabajadores del campo.

Ley N° 12.332/1935

Esta exclusión quedó eliminada, felizmente, como consecuencia de la sanción de la ley N° 12.332, *del año 1935*, que ratificó a la pertinente convención aprobada en 1921, en Ginebra, por la Conferencia Internacional del Trabajo, en los siguientes términos: “Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique la presente convención se compromete a extender *a todos los asalariados agrícolas* el beneficio de las leyes y reglamentos que tengan por objeto indemnizar a las víctimas de accidentes sobrevenidos *por el hecho o en ocasión del trabajo*”.

Ley N° 12.631/1940

La confirmación de lo ratificado mediante la ley 12.332 fue dada cinco años después por la *ley N° 12.631*, del 14 de julio de 1940. Desde entonces el texto del inciso 6º del artículo 2º de la ley N° 9.688 fue el siguiente: “Industrias forestal, agrícola, ganadera y pesquera, comprendiendo a obreros y empleados mayores de doce años de edad, *cualquiera que sea la naturaleza del trabajo*. Quedan también comprendidos los domésticos que no estén exclusivamente al servicio personal de los patrones. Exceptúanse los miembros de la familia del

patrón, ascendientes y descendientes y cónyuge, y los que realicen *trabajos ocasionales*, amistosos o de buena voluntad”.

Como lo han establecido la doctrina y la jurisprudencia, la ley N° 9.688 *protege contra el riesgo profesional que crea el trabajo*, pero nunca contra los riesgos generales a que están expuestas todas las personas en iguales circunstancias.

La ley *presume* la responsabilidad patronal respecto de todo accidente producido en los casos previstos por ella, bastando que la víctima —o sus derecho-habientes, en caso de muerte— demuestre, pruebe la *existencia* del accidente.

La responsabilidad patronal subsiste aunque el accidentado trabajase bajo la dirección de un *contratista*, de que el patrono se valga para su explotación. Pero no subsiste si, tratándose de explotaciones forestal, agrícola, ganadera o pesquera, el contratista usare máquinas movidas por fuerza mecánica; en este caso el contratista responde directa y exclusivamente por los daños ocasionados por las máquinas que sean de su propiedad, según la mencionada ley N° 12.631.

EL SEGURO

La ley autoriza al empleador a delegar su obligación, o sea la responsabilidad indemnizatoria, mediante *seguros* constituidos en favor de su personal, que garanticen el monto total de la reparación pecuniaria derivada de ella. Pero, como medida precaucional, la entidad aseguradora debe estar autorizada oficialmente —por la Nación o por las provincias— para esas operaciones, y además debe cumplir los requisitos que la ley indica con “bases”, en el artículo 20, v. gr. el depósito de garantía.

Ley N° 16.600/1964 *SEGURO DE VIDA COLECTIVO* ^a

Actualmente, mediante la ley N° 16.600, del 30 de octubre de 1964, que consta de catorce artículos, “Implántase con carácter obligatorio y por intermedio de la Caja Nacional de Ahorro Postal, el *Seguro de vida colectivo* para el personal *permanente* que trabaja en las actividades rurales, comprendido en el Estatuto del Peón y en el régimen jubilatorio establecido por la ley N° 14.399. Este seguro cu-

^a El texto completo de la ley va en el APENDICE.

brirá los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente para el trabajo". (Art. 1).

ENFERMEDADES PROFESIONALES

Para acordar el derecho a la indemnización, la ley N° 9.688 no ha tomado en consideración solamente a los "infortunios del trabajo" ocasionados por causas súbitas y violentas, sino también a las incapacidades o a la muerte a causa de las llamadas "*enfermedades profesionales*", o sea enfermedades contraídas por los trabajadores "en el ejercicio de su profesión", y siempre que se cumplan las *condiciones* siguientes:

a) Que la enfermedad sea declarada efecto exclusivo de la clase de trabajo que la víctima realizó durante el año precedente a la inhabilitación.

b) Que el obrero no sufriese esa enfermedad antes de entrar en la ocupación que tuvo que abandonar.

Si se comprobase que la enfermedad fue contraída mientras se hallaba al servicio de otros patronos, serán éstos los responsables. Y si, por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, la obligación de indemnizar se repartirá proporcionalmente entre los patronos que ocuparon a la víctima durante el último año en la clase de trabajo a que se debió la enfermedad.

Corresponde al Poder Ejecutivo Nacional la enumeración taxativa de las "enfermedades profesionales", mediante decretos basados en los informes de las oficinas técnicas, y es obligación del patrono en cuyo servicio se incapacite por enfermedad un trabajador, hacer la denuncia como si se tratase de un accidente.

La ley N° 9.688 ha sido reglamentada, para la Capital Federal y para los entonces Territorios Nacionales, mediante el *decreto del 14 de enero de 1916*. Quedó, pues, a cargo de cada provincia la reglamentación de la ley para su aplicación en la respectiva jurisdicción.

A los pocos días (18 de enero) el Ministerio del Interior solicitó de los gobernadores de provincia que, en lo posible, dictasen una reglamentación semejante a la adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional. Así lo hicieron, en general.

El decreto reglamentario de 1916 enumeró, en el artículo 149, estas quince “enfermedades profesionales”: pneumoconiosis, tabacosis pulmonar, antracosis, siderosis, saturnismo, hidrargirismo, cuprismo, arsenicismo, oftalmía amoniacal, sulfocarbonismo, hidrocarburismo, fosforismo, *pústula maligna*, *dermatosis* y *anquilostomiasis*.

Decretos posteriores elevaron esa cantidad, incluyendo, por ejemplo, a la *brucelosis*, de acuerdo con la autorización acordada por el artículo 22 de la ley 9.688 y con el texto del artículo 150 del citado decreto reglamentario, que dice así: “Oportunamente se determinará cualquier otra enfermedad que crea deberse comprender dentro de la precedente enumeración”.

ENFERMEDADES OCASIONALES

Como la ley no define el “accidente de trabajo”, ni lo limita a los infortunios ocasionados por causas súbitas y violentas, puesto que prevé las “enfermedades profesionales”, se ha considerado que esa circunstancia autoriza una latitud de interpretación del “infortunio de trabajo”.

En efecto, la doctrina y la jurisprudencia han establecido el alcance de lo que configura el “accidente de trabajo”, no sólo en el sentido de que es tal toda lesión traumática o mecánica, sino también toda “afección patológica” que disminuya la capacidad laborativa.

Así, pues, dentro del criterio amplio con que es menester interpretar el “derecho de indemnización” acordado por la ley 9.688, no sólo deben dar lugar a ella las “enfermedades profesionales” especialmente designadas en los decretos del Poder Ejecutivo, sino igualmente todas aquellas dolencias o afecciones imputables al trabajo realizado por el trabajador y que hayan disminuido su capacidad laborativa.

Los factores que deben coexistir para que la *enfermedad ocasional* constituya “accidente indemnizable” deben ser los que permitan inferir la vinculación causal y necesaria entre aquélla y su trabajo. Se deben tener en cuenta los factores desencadenantes de la dolencia.

Por lo tanto no cabría excluir del régimen de la ley N° 9688 a las incapacidades resultantes de enfermedades ocasionadas directamente por el trabajo, sus elementos o condiciones, es decir cuando provienen

de la acción nociva que la prestación de servicios ejerce sobre la salud del obrero.

No existe razón de justicia, dentro del régimen de la ley N° 9688, que obligue a la exclusión de *enfermedades ocasionadas por el trabajo*, ni por sus fines sociales, ni por la naturaleza de los riesgos que ella ha querido amparar. No deben ser excluidos, pues, a priori, ciertas enfermedades o dolencias por no ser consideradas profesionales o por no tener origen traumático.

Lo que corresponde investigar es si en el caso existe la demostración del nexo de causalidad, de carácter estricto, entre la enfermedad y el trabajo realizado para el empleador.

Visiblemente la jurisprudencia muestra que se están indemnizando como enfermedades “ocasionales” de trabajo, equiparándolas a accidentes, casos que no son verdaderamente reconocidos como accidentes, ni como enfermedades profesionales.

Es que las circunstancias del caso son suficientes para fundar el derecho a la indemnización, sobre la base de una característica y efectiva infección accidental por causa profesional, como sería, v. gr. el trabajo al servicio de la ganadería.

En esa situación está la HIDATIDOSIS, por ejemplo, enfermedad que merece ser considerada como un riesgo específico o inherente a la explotación rural pecuaria. En el caso, el trabajador rural —peón, capataz, puestero, etc.— afronta un peligro que, por su naturaleza, debe ser considerado inherente a la empresa agropecuaria misma, pues existe vinculación causal entre la enfermedad y el trabajo campero, que —al respecto— se realiza en un medio notoriamente infectado, de condiciones higiénicas deficientes, favorecedoras en grado máximo de la infección del hombre, por la fatal promiscuidad con los perros parasitados.

Existe, pues, evidente presunción científica de vinculación causal.

En síntesis: la HIDATIDOSIS, aún sin estar incluida en la nómina de las enfermedades profesionales, debe ser considerada *indemnizable*, por aplicación de los elementos doctrinarios y jurisprudenciales brevemente expuestos.

El hacendado puede evitar el daño procediendo con elemental diligencia. Ese es su deber y su conveniencia.

Para estimar la inexistencia de la culpa patronal no podría ser decisiva la circunstancia de que se adoptó el cuidado o precaución *usual*, pues lo que se requiere es que ponga en práctica el cuidado *necesario indispensable*, para evitar el mal, lo cual es perfectamente factible para casos como el de la HIDATIDOSIS.

Le incumbiría al hacendado demandado, por lo tanto, la prueba de que agotó los medios preventivos, y que el daño también se hubiese manifestado a pesar de que adoptó las medidas adecuadas para conjurar el peligro.

Así, pues, insistimos en que si bien la HIDATIDOSIS no es legalmente indemnizable como “enfermedad profesional” en nuestro medio, en el presente, puede serlo, sin embargo, al revestir el carácter de “*enfermedad accidente*”, dependiendo ello de la prueba que se produzca.

Corresponderá, por lo tanto, respecto de la HIDATIDOSIS, analizar en cada caso si pudieron *causarla* o *agravarla* las condiciones o el ambiente en que el trabajo se desarrolla.

Es cierto, también, que la HIDATIDOSIS pudo haber sido adquirida por el peón, digamos, con anterioridad a su trabajo en el establecimiento donde se desempeña actualmente, y hallarse la enfermedad en el estado que se ha llamado “de equilibrada inactividad”. Pero después, con los esfuerzos que el trabajo rural exige, la enfermedad se agravó: ruptura de quistes e hidatidosis secundaria, etcétera.

La diferencia, pues, entre “*enfermedad ocasional*” o “*enfermedad accidente*”, y “enfermedad profesional”, estriba en que para que la primera dé lugar a la indemnización, es menester que la víctima demuestre que ha sido efecto exclusivo de la clase de trabajo que realizó. En cambio, tratándose de las enfermedades calificadas como “profesionales”, la relación de causalidad *se presume* con sólo acreditar que la dolencia fue contraída durante la prestación de servicios y bajo su influencia presuntiva. Esta “*presunción*” favorece el procedimiento legal, pero al mismo tiempo impone las limitaciones que caracterizan a las enfermedades profesionales, según la ley.

DE TODOS MODOS, PODEMOS DECIR QUE “MAS VALE PREVENIR EL RIESGO DEL INFORTUNIO DEL TRABAJO, QUE REPARAR O INDEMNIZAR EL PERJUICIO PRODUCIDO”.

ESTATUTO DEL PEON

Decreto-ley N° 28169, del 17 de octubre de 1944.

Ratificado por la ley N° 12.921, del año 1947.

El *Estatuto del Peón* tiene un antecedente histórico, desde hace un siglo, en el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, del año 1865, cuando aún no existía el Código Civil.

El Título III de dicho Código Rural, que se refiere a “Disposiciones comunes a Ganadería y Labranza”, cuenta con la Sección III sobre “Patrones y Peones” (arts. 222/242), donde se considera *patrón rural* a quien contrata los servicios de una persona en beneficio de sus bienes rurales”, y es *peón rural* “quien los presta mediante precio o salario” (art. 222). “El peón es destinado, o a desempeñar indistintamente todos los trabajos generales que la naturaleza del establecimiento exija, o a ejecutar algunos especiales, ya determinados; y en consecuencia, puede ser: a día por día, o por quincena, o por cierto número de meses, o por un año. Puede serlo también para una tarea, empresa determinada, esto es, a destajo” (art. 223).

La mayoría de los artículos pertinentes en esta parte del Código conciernen al “contrato” de trabajo, y a los derechos y obligaciones emergentes para las partes.

En cuanto a la “vivienda”, el artículo 238 dispone: “El peón residirá en la casa principal del patrón, o en sus puestos, o pertenencias según éste lo disponga, salvo mutuo acuerdo en contrario”.

Respecto del “*peón a destajo*”, el Código le dedica los artículos 240/242, y considera que “es un verdadero empresario, que toma sobre sí el ejecutar en una estancia, chacra, quinta, u otro establecimiento rural. una obra o tarea determinada, en un término dado, o sin término fijo, y mediante el abono de una cantidad redonda, pagable como y cuando convenga con su patrón”.

Asimismo contiene un grupo de disposiciones que se refieren a EPIZOOTIAS o ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (Arts 280/282) a fin de prevenirlas o de eliminarlas, con consecuencias favorables para los productores rurales, no sólo desde el punto de vista económico, sino también de su propia salud, de la de su familia y de su personal, contra los efectos perjudiciales de las zoonosis. El texto de aquellos artículos va en el APENDICE.

En el Título Quinto, sobre “Prevenciones Especiales”, se nos ofrece una preocupación sumamente interesante digna de destacar, sobre todo para aquella época. Es la del artículo 310: “Se encarga y recomienda a las Municipalidades y jueces de Paz, que procuren obtener por medio de consejo y persuasión”, entre otras cosas, lo siguiente:

1º Que los padres, tutores, curadores o encargados de niños, hagan que estos concurran a la escuela primaria, al menos una parte del año”.

Y también esta otra singular disposición, entre las “finales”, en el artículo 318: “El Poder Ejecutivo dictará las providencias más eficaces y adecuadas, a fin de que el conocimiento de este Código, sea extendido y generalizado en toda la campaña; y *hará al mismo tiempo obligatoria su lectura en todas las escuelas de varones existentes en ella”.*

*

Volvamos ahora al Estatuto del Peón, cuerpo legal que consta de 29 artículos. Este rige, en todo el país, las condiciones del trabajo rural, su retribución, las *normas de su desenvolvimiento higiénico*, el alojamiento, la alimentación, el descanso y las reglas de disciplina.

Concierne tan sólo al *personal permanente*.

No rige para las faenas de cosecha —cuyo régimen está dado por la ley N° 13.020, del año 1947— pero se aplica también a aquellas tareas que, si bien participan de características comerciales o industriales propiamente dichas, utilizan obreros del campo, o se desarrollan en los medios rurales, montañas, bosques o ríos.

Vamos a destacar, a continuación, sólo algunas de las disposiciones más vinculadas con la materia que estamos considerando.

El Estatuto deja expresamente establecido que los derechos conferidos al "PEON", en ningún caso deberán ser interpretados, por los beneficiarios o por autoridad alguna, en el sentido de crear divergencias o de romper la armonía tradicional que debe ser característica permanente en el desarrollo del trabajo rural.

El régimen horario habitual de las tareas rurales no es alterado por el Estatuto. En la materia éste se limita a establecer, con carácter obligatorio, las *pausas* para alimentación y descanso, según se trate del desayuno y del almuerzo.

El *descanso dominical* es obligatorio, con la salvedad de los trabajos absolutamente urgentes y que no pueden paralizarse sin grave perjuicio. En el caso de trabajos dominicales permanentes se prevén las guardias periódicas y alternadas, así como el descanso compensatorio en el curso de la semana inmediata.

En cuanto al *Alojamiento y a la Alimentación*, cuando hubiesen sido estipulados a cargo del patrono, deberán ser provistos en condiciones adecuadas de higiene y abundancia.

Respecto del *Alojamiento*, el Estatuto entra en detalles en cuanto al local, mobiliaje, dependencias para higiene, etc., todo lo cual debe ser mantenido en el mismo estado por el trabajador beneficiario.

Cuando se acuerda al trabajador adecuada habitación para toda la familia, es obligatorio facilitarle no menos de media hectárea de tierra, cercada, o trescientos metros cuadrados si es de regadío, para huerta, aves, engorde de cerdos encerrados y lechera.

Los locales destinados a habitación del personal no podrán ser utilizados como depósitos y deberán tener separación completa con los lugares de crianza, guarda, o de acceso de animales.

A PROPOSITO DE LA HIGIENE DEL TRABAJO.

Se dispone que los trabajadores que deban desempeñarse a la intemperie, serán provistos —a cargo del patrono— de vestimenta y calzado adecuados que los proteja contra la lluvia y el barro— y también que, en el tambo, los trabajos de ordeño y apoyo deberán realizarse bajo tinglados que pongan al trabajador a cubierto de la lluvia y del viento.

La *asistencia médica y farmacéutica* de los trabajadores es puesta por la ley a cargo del patrono, como complementaria del salario establecido.

Para ese efecto cada establecimiento o empleador debe disponer de un *botiquín de urgencia* para casos de primeros auxilios, y en condiciones de cooperar en la lucha contra enfermedades endémicas en las regiones insalubres, conforme a directivas y disposiciones de las autoridades sanitarias.

Estas obligaciones pueden ser transferidas por los patronos a entidades profesionales, aseguradoras, o mediante cualquier otro procedimiento que, a juicio de la autoridad de aplicación, asegure la efectividad de los servicios sociales de aplicación.

De la REGLAMENTACION.

Personal comprendido

y Personal excluido.

En 1949, el 31 de diciembre, fue dado el decreto N° 34.147, que señala normas para la aplicación del Estatuto del Peón.

Respecto de los trabajadores comprendidos y de los excluidos de las disposiciones de dicho Estatuto, los artículos 2° y 3° establecen respectivamente, lo siguiente:

Art. 2° — Además de los enumerados en las tablas anexas al Estatuto del Peón, considéranse *comprendidos* en sus disposiciones:

- a) Los obreros artesanos que trabajan *permanentemente* en los establecimientos de campo, tales como carpinteros, herreros, albañiles, pintores y los que realicen tareas correspondientes a otras especialidades afines;
- b) Los cocineros de peones, despenseros, panaderos, carniceros y ayudantes que se encuentran en iguales condiciones;
- c) El personal *permanente* que realice tareas auxiliares de las enumeradas;
- d) Los quinteros y jardineros que realicen en forma permanente y como labor principal tareas de índole rural, en quintas, parques y jardines privados no destinados al comercio y/o a la industria;

- e) Los peones de tambo;
- f) Los capataces y encargados;
- g) Los demás trabajadores que se desempeñan, en forma *continuada* o en tareas de carácter *permanente* en establecimientos agrícolas, ganaderos o forestales.

Art. 3º — Quedan *excluidos* de las disposiciones del Estatuto del Peón:

- a) El personal ocupado en las tareas de cosecha y otras actividades transitorias de carácter similar;
- b) Los obreros especializados que contratan los establecimientos rurales para realizar una tarea definida y de carácter transitorio;
- c) El personal ocupado en el servicio doméstico;
- d) Las personas que representan en forma directa al empleador y las ocupadas en tareas administrativas en los establecimientos rurales.

LEY N° 13.020

El 22 de septiembre de 1947 fue sancionada por el Congreso la recordada ley N° 13.020, creadora de la “Comisión Nacional del Trabajo Rural” y de “Comisiones paritarias de zona”, fijando normas generales para el trabajo familiar en la explotación rural y para la fijación de salarios.

Consta de 16 artículos, y en el 3º, que se refiere a la institución, en cada zona, de una comisión paritaria compuesta por delegados obreros y patronales, se establece lo siguiente:

“Será atribución de cada comisión paritaria local fijar por cada *ciclo agrícola*, tarea o cultivo y por zona, las condiciones y jornadas de duración del trabajo a que deberá ajustarse, obligatoriamente, toda persona que trabaja, *ya sea a jornal o a destajo*, en la recolección, corte y trilla, transporte, manipulación y almacenamiento de las cosechas de cereales, oleaginosas, hortalizas, legumbres y otros frutos, corte y tala de toda clase de vegetales, ya sea alimenticios o de uso industrial, de la *ganadería*, explotación de la industria lechera, de la granja o de toda otra actividad del trabajo rural, *cuando reúnan características similares* en cuanto al *trabajo jornalizado o a destajo* se

refiere; la forma de integrarse los equipos mínimos o composición de cuadrillas; *asistencia sanitaria; alimentación adecuada y vivienda higiénica*, que deberá proporcionarse al referido personal”.

Como se aprecia, la ley está referida al trabajador accidental, de temporada, ocupado para una determinada operación rural, y cuyo contrato termina al terminar ésta.

No comprende pues, al trabajador estable, permanente, que en algunas provincias se conoce con la denominación de “mensual”, regido por el Estatuto del Peón”. El trabajador contemplado por la ley N° 13.020 es, esencialmente, el “bracero ocasional”, para tareas temporarias.

Trabajo familiar

La ley N° 13020 reconoce expresamente, en favor del mantenimiento de la unidad de la familia campesina, el derecho a realizar cualquiera de los trabajos señalados, y a integrar los equipos de trabajo *con sus propios miembros*. Pero establece esta *condición*: Que esos miembros de la familia de los patronos, habilitados o interesados directos de la explotación, *residan permanentemente en ella o dependan de aquéllos para su regular subsistencia*. (Art. 5°).

También esos miembros de la familia o personal permanente, pueden intervenir libremente en las tareas del *transporte* de la cosecha o producción, hechas con *medios propios*, a condición de que los vehículos estuvieren registrados a nombre del responsable de la explotación, en los municipios de la zona.

ESTATUTO DEL TAMBERO

Decreto acuerdo N° 3750, del 5 de febrero de 1946.

Ratificado por Ley N° 12.921, del año 1947.

Este Estatuto, que consta de 36 artículos, se refiere al “tambero mediero”, y rige las condiciones de su trabajo en todo el país.

El Estatuto considera “tambero mediero” a quien está a cargo de la “explotación de tambo en participación”, con aquélla o cualquier otra denominación.

Entre las *obligaciones del “tambero mediero”* figuran en la ley las siguientes:

Su trabajo personal en el tambo;

El cuidado y responsabilidad de todos los bienes a su cargo;

La asistencia médica y farmacéutica de sus peones;

Poseer certificado de buena salud, y también sus peones, renovable cada seis meses;

Cubrir los riesgos de los peones mediante el seguro;

En el caso de dos ordeñes diarios, mediación de 12 horas entre el comienzo de ambos, para descanso en el trabajo;

Cumplir el horario de trabajo y la forma de explotación que fije el propietario, a cuyas órdenes directas —o de su representante— estará.

Entre las *obligaciones del propietario*, figuran las siguientes:

Proveer al tambero mediero de ALOJAMIENTO adecuado, con habitaciones para matrimonio, en su caso, y para los hijos de cada sexo. Asimismo para los peones, si los hubiere, y tinglado o ramada para guardar los elementos de trabajo.

Proveer un tinglado para que el ordeño y el apoyo se efectúen bajo techo. Y también piletas para el refrescamiento de la leche producida;

Proveer elementos de trabajo, como los tarros para el transporte de la leche, y las desnatadoras;

Tomar a su cargo el seguro por riesgos del “tambero mediero”.

La ley dispone, detalladamente, respecto del *contrato* y sus consecuencias entre las partes, y de las autoridades de aplicación del Estatuto.

*

En cierto aspecto el Estatuto del Tambero Mediero permite lograr particulares consecuencias favorables al margen del mismo, como es la obtención de mejor calidad del producto.

A este resultado concurren: el “ordeño bajo techo”, que al proteger a los ordeñadores y apoyadores contra las inclemencias del tiempo, permiten realizar la recolección de la leche con mayor limpieza; el refrescamiento de la leche en “piletas”, para su mejor conservación; y la obligación de los certificados de buena salud para el tambero mediero y sus peones, lo cual prevendrá posibles contagios por intermedio de la leche.

Indirectamente, pues, el Estatuto del Tambero Mediero es apto para la obtención de mejor leche, al mismo tiempo que protege al “trabajador rural”.

*

Y ahora, para dar término a esta exposición, va la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N

CONSIDERANDO:

Que, aparte de las leyes N° 9688 y N° 12631, diversas disposiciones contenidas en la legislación especial del trabajo rural —Estatuto del Peón, Estatuto del Tambero Mediero, y Ley 13.020, sobre Trabajo Rural— prevén la asistencia médica y farmacéutica por enferme-

dad del trabajador, y quienes poseen establecimientos agropecuarios se ven precisados a prestar especial consideración a la mejor sanidad del ambiente en que se desarrollan las actividades rurales;

Corresponde recomendar:

Que, tanto los Productores Rurales como las Autoridades de la Nación —Gobierno Federal y Gobiernos de Provincia— deben dar cumplimiento fiel, en el desarrollo de sus tareas y en sus jurisdicciones, respectivamente, a las obligaciones establecidas por la legislación de Policía Sanitaria Veterinaria en vigor, a fin de *prevenir o eliminar* las múltiples causas de entorpecimiento sanitario del Trabajo Rural, en beneficio inmediato del Trabajador Agropecuario y de la Empresa Agropecuaria, así como de la Salud Pública, de la Economía Nacional y del Bienestar Social, comprometidos particularmente por la existencia de diversas y graves ZOONOSIS;

Y que, siendo evidente que el esfuerzo privado no suele ser suficiente para la obtención de los efectos perseguidos, para facilitarlos se requiere que el Estado, en todas sus jurisdicciones, provea Asesoramiento Técnico permanente, mediante agentes oficiales, en las fuentes mismas de producción, para difundir la más amplia enseñanza acerca de la ZOOPROFILAXIS, y de las indiscutibles y generales ventajas de practicarla sin tregua.

*Breves fundamentos de la
precedente recomendación*

En el ambiente rural, en el desarrollo de las actividades agropecuarias, surgen estos riesgos: el “accidente de trabajo” o “accidente” propiamente dicho, la “enfermedad profesional” y la “enfermedad-accidente”, bien caracterizados por la doctrina y la jurisprudencia.

Con los dos últimos riesgos está vinculada intimamente la ZOOPROFILAXIS, referida a las enfermedades que atacan a los animales y, particularmente, a las ZOONOSIS o enfermedades de los animales vertebrados transmisibles al hombre, y de éste a aquéllos.

De las ZOONOSIS sólo tienen el carácter de “profesionales” las comprendidas en la nómina que elabora el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con la Ley N° 9688, v. gr. el carbunclo, la brucelosis, etc., no así la tuberculosis, la equinocosis-hidatidosis, la triquinosis, etcétera, a las que, no obstante, la jurisprudencia les ha reconocido el carácter de “enfermedad-accidente”, acordando protección jurídica a sus víctimas.

En verdad las condiciones de vida en el ambiente agropecuario o rural se hallan estrechamente vinculadas con las condiciones en que se desarrolla el trabajo del hombre.

El más profundo y necesario conocimiento de las ZOONOSIS, sobre todo respecto de su origen, de su diagnóstico, de su evolución, obliga a empeñarse en prevenirlas. A este respecto corresponde recordar las sabias palabras de PASTEUR;

MAS VALE PREVENIR QUE CURAR.

CURAR EN LOS ANIMALES ES PREVENIR EN EL HOMBRE.

A ello tiende la RECOMENDACION propuesta.

A P E N D I C E

—Del Congreso del Profesorado Argentino, realizado en la Capital Federal, en 1940	45
—Soluciones americanas recomendables. La “Escuela Consolidada” norteamericana y canadiense	49
—Del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires	51
—Seguro de vida colectivo para el personal rural permanente .	53
—Ministerio de Educación y Justicia. Programa Nacional intensivo de alfabetización y educación de adultos	56

DEL CONGRESO DEL PROFESORADO ARGENTINO

REALIZADO EN LA CAPITAL FEDERAL, EN 1940

Como delegado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, presenté un trabajo sobre *“Orientación de la Educación Pública Obligatoria. Apuntes sobre elementos de juicio para contribuir a formar el criterio con que se ha de fijarla”*, que terminó con una ponencia y un proyecto de DECLARACION, aprobados por el Congreso, y que dicen así:

CONSIDERANDO:

Que la actividad económica argentina predominante es de carácter agrario;

Que la agricultura y las industrias vinculadas a la producción de la tierra constituyen la base de nuestra potencialidad económica, y son ellas también las que despiertan el más inmediato interés mundial;

Que existe un grave desequilibrio —que reclama reacción urgente— entre la población rural y la población urbana del país, en perjuicio de la primera y en consecuencia, de la economía integral de la Nación;

Que, dando mayor impulso a la explotación agraria, se previene la desocupación, fuente de serios inconvenientes sociales y económicos, así como se evita que el desierto se intensifique en nuestro todavía escasamente poblado territorio;

Que el Estado, reconociendo la necesidad de fomentar la explotación rural, para poblar el interior del país, racionalizar dicha explotación y llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios, acaba de sancionarnos una “ley de colonización”;

Que varias decenas de millones de hectáreas no reciben aún la explotación para que son aptas;

Que existen también varias decenas de millones de hectáreas de “tierra del patrimonio de la Nación” no afectadas a concesiones de

venta o arrendamiento, y que esperan el brazo del hombre para hacerlas productivas;

Que al país le importa, en manera especial, mejorar las condiciones de la masa de sus habitantes, favoreciendo no sólo las aptitudes o capacidades de la élite, sino también y sobre todo las del conjunto de ciudadanos, a fin de que las posibilidades de bienestar se difundan y aumenten;

Que esa circunstancia señala el imperativo del fomento de la vocación hacia la tierra, por medio de la educación pública y, muy especialmente, la de los adolescentes, ya que esa masa popular constituye el verdadero fondo de reserva de la Nación;

Que la población escolar media y universitaria oscila alrededor de sólo el 6 por ciento de la población escolar primaria;

Que debe merecer particularísima atención la escuela primaria, pues es axiomático que ella es la base de toda la estructura educativa, dependiendo de su eficacia el éxito de las etapas sucesivas;

Que las informaciones oficiales señalan el grave hecho de que en las escuelas nacionales de provincias los niños dejan de concurrir a ellas al cabo del primer año, alcanzarían el cuarto grado sólo el 11 por ciento.

Que ese fenómeno es constante, se acentúa con el tiempo y mantiene la ignorancia en los medios rurales;

Que entre las causas de esa deserción escolar figuran la inercia, las dificultades materiales y la falta de fe en los beneficios de la enseñanza que en dichas escuelas se imparte;

Que también se ha reconocido oficialmente que el tipo de instrucción no responde a las condiciones mentales ni a la situación económica de gran cantidad de alumnos;

Que se ha señalado, también oficialmente, no sólo el recargo innecesario del contenido de las asignaturas que se cursan en las escuelas de la capital, provincias y territorios nacionales, sino también que el magisterio primario no obtiene en las escuelas normales la preparación necesaria para que la educación común sea eficiente, de acuerdo con la realidad argentina, especialmente en cuanto a la enseñanza de nociones de agricultura y de ganadería prevista por la ley orgánica de 1884;

Que desde más de medio siglo atrás se han expuesto acertados y patrióticos anhelos respecto de la orientación que corresponde a la

educación primaria argentina, en numerosos congresos, libros, folletos, conferencias, proyectos de ley, etcétera;

Que, únicamente, para dar a la educación primaria orientación agraria, especialmente en la que se imparte en los medios rurales, se han pronunciado —en estos últimos tiempos— la Sociedad Rural Argentina, diversas Asambleas de agrarios, el reciente Congreso de la población, etcétera;

Que los debates realizados en el Museo Social Argentino, en 1939, constituyen una verdadera expresión de anhelos, que no es posible seguir desoyendo, pues evidencian que el país no está satisfecho con la educación pública obligatoria, y que es menester procurar la pronta solución del problema, de acuerdo con las ideas emitidas;

Que el educando de la campaña, sobre todo, necesita un caudal de conocimientos de tal naturaleza y extensión, que no pueden ser transmitidos sino por maestros convenientemente preparados;

Que la Federación de Asociaciones del Magisterio Argentino, asimismo, después de manifestar, en agosto próximo pasado, que la escuela primaria debe ser de ocho grados, divididos en dos etapas: la una formativa, mediante la instrucción elemental, y la otra de educación práctica, declaró —sintetizando el pensamiento dominante en medios responsables— que “esta escuela es tanto más necesaria en la campaña, donde el niño rural difícilmente tendrá a mano otra escuela para proseguir su cultura, una vez terminados los cursos primarios”; y que para la escuela rural “es necesaria la escuela normal agraria, formadora del maestro técnico en pedagogía y, al mismo tiempo, en agricultura y zootecnia”;

El Congreso del Profesorado Argentino,

D E C L A R A :

1º — Que toda construcción educacional basada en la escuela primaria debe considerar expresamente la realidad argentina, pues la formación del “hombre de campo” constituye un imperativo social en la República Argentina;

2º — Que la escuela primaria actual no llena cumplidamente su misión al no guardar relación, en general, con las actividades económicas fundamentales de la Nación. Debe tener en cuenta las condiciones de nuestro país, nuestras necesidades, nuestras costumbres y nuestros recursos;

3º — Que la educación agraria, si bien tiene su desarrollo lógico en el campo, puede también realizarse en los grandes centros urbanos, donde abundan los educandos con particulares tendencias de ese género;

4º — Que es urgente la formación del docente especialmente capacitado a ese efecto, al que se deberá estimular con una compensación económica de preferencia, por exigirlo así la naturaleza específica de la labor docente en los medios rurales;

5º — Que en la escuela normal debe introducirse la reforma que permita proveer un magisterio apto para llenar el gran vacío existente;

6º — Que, para realizar la conquista de nuestro propio territorio, es necesario desarrollar una conciencia rural en el país, y despertar en sus habitantes un interés creciente por los problemas del campo, imprimiendo esa orientación en los diversos grados y formas de la educación pública.

*

Otra declaración del Congreso del Profesorado Argentino, propuesta por el Prof. Dr. José Rafael Serres, Delegado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, y aprobada por unanimidad, fue la siguiente:

QUE ES ANHELO DEL PROFESORADO ARGENTINO QUE UNO DE LOS MINISTERIOS NACIONALES ESTE CONSAGRADO A LA INSTRUCCION PUBLICA, EXCLUSIVAMENTE.

SOLUCIONES AMERICANAS RECOMENDABLES

LA “ESCUELA CONSOLIDADA” NORTEAMERICANA Y CANADIENSE *

Es un concepto axiomático, en estos momentos, que una gran finalidad que la Nación debe alcanzar, es la del mayor progreso de una población rural arraigada y encariñada con la tierra.

Evidentemente la población rural sigue encontrándose en una situación desventajosa, si la comparamos con la urbana. Es en la ciudad donde suelen hallarse mejores oportunidades de trabajo, asociación, recreo y condiciones sanitarias más convenientes. Esa ha sido una de las causas para decidir a mucha gente a abandonar el campo, en procura también de una mejor educación para los hijos, pues las escuelas de la ciudad suelen ser más sanas y atrayentes, con programas más de acuerdo con las necesidades de la vida, y cuyos maestros están mejor entrenados y remunerados; además el año escolar es más largo —si bien debe serlo más todavía— y la asistencia más regular y puntual, gozando de una vigilancia médica constante, formando también parte regular de su actividad la educación física, doméstica y vocacional.

De ahí que sea necesario hacer de la escuela rural algo análogo, para lo cual se sugieren diversas soluciones, destacándose la *Escuela Consolidada*, que desde largo tiempo es una realidad en los Estados Unidos y en Canadá.

La *Escuela Consolidada Rural* es la que reúne a la población escolar de algunas escuelas simples, y su personal de dirección, con el propósito de obtener —como lo obtiene— mejores ventajas educativas.

(*) Sobre materia análoga puede verse “Aldeas Escolares”, del doctor Ramón J. Cárcano, publicado en 1933, y reproducido por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria en 1962.

En general, esta clase de establecimientos sirve allá las necesidades escolares de una zona tal, que cada alumno debiera andar no menos de una hora para llegar a la escuela, siendo transportados en vehículos oficiales, a expensas del Estado.

Según la opinión de quienes apoyan la existencia de dichos establecimientos, sus ventajas principales son las siguientes: en primer lugar, siendo mayor el número de alumnos, amplía las vinculaciones de cada uno de ellos, lo cual importa una mayor cooperación social y económica. Estos alumnos, que concurren a la misma escuela, y que viven, dentro de un área de varias leguas a la redonda, y hacen esto durante el transcurso de varios años, al llegar a la edad adulta gozarán de los beneficios de una vecindad más amplia y rica en vinculaciones y amistades.

Procura, además, una mejor dirección educativa, económica y social. Una gran escuela, con varios centenares de alumnos, puede ser puesta bajo la dirección de una persona enérgica y capaz, con la asistencia de personal más especializado y profesional que lo secunde.

Un establecimiento educativo de esta naturaleza desarrolla condiciones más propicias para el bienestar de la comunidad. No puede ocurrir de otro modo cuando se dispone de terreno amplio y bueno; cuando se obtiene una asistencia más puntual y regular a los cursos, y un mayor número de alumnos, y la consecuencia del mayor interés y estímulo que deriva del mismo.

Permite también la organización de un mejor programa de estudios, que contrasta con la pobre y limitada instrucción que puede actualmente suministrarse en una escuela de nuestro ambiente rural.

Por lo demás, allá se aprovechan estas escuelas, como centro social para todo el vecindario. La chacra escolar, mismo pequeña, es motivo de interés y comentario, y puede ser usada para realizar conferencias públicas agropecuarias, y hasta exhibiciones cinemotográficas en algunas, para el esparcimiento de los vecinos.

Son éstas, someramente expuestas, las ventajas que se atribuyen a ese tipo de escuelas, cuya difusión es muy grande en Estados Unidos, y en Canadá, y que presentan, dentro de sus líneas generales comunes, variedades en los diferentes Estados.

DEL
CODIGO RURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En el título III, sobre “Disposiciones comunes a Ganadería y Labranza”, la Sección IX se refiere a Epizootias o Enfermedades Contagiosas, en los artículos 280 a 282, cuyo texto va más abajo.

Esos tres artículos señalan la primera preocupación gubernativa en favor de la lucha contra las enfermedades contagiosas en los ganados. Comprendían tres medidas obligatorias fundamentales: la comunicación o denuncia, el aislamiento de los enfermos o sospechosos, y la destrucción (enterramiento) de los cadáveres.

Preveían también la consulta del gobierno “a veterinarios o a peritos”, y aun su envío al lugar del hecho, para dictar luego, “con arreglo a sus informes o consejo, las medidas que se estimen, para cortar el mal”, así como la redacción de instrucciones adecuadas, que “será del estricto deber de la autoridad local observar”.

Esto no era sino la aplicación, por la provincia de Buenos Aires, de las facultades inherentes al “poder de policía”.

He aquí el texto de dichos artículos:

*Obligaciones de los dueños
o tenedores de ganado.*

Art. 280° — Todo estanciero, labrador y en general todo dueño o tenedor de ganado, particularmente ovejuno, que vea o sospeche en él alguna peste y enfermedad que sea o pueda quizá ser contagiosa, está rigurosamente obligado:

- 1° A comunicar prontamente el hecho a la autoridad local;
- 2° A separar y conservar bajo pastor, de día y en potrero o corrales, de noche, los animales enfermos o sospechosos;
- 3° A sepultar los animales que mueran.

*Obligación de la autoridad
pública. Primeras providencias
y medidas precaucionales*

Art. 281° — La municipalidad o el juzgado de Paz, en su defecto, dictará inmediatamente providencias, dirigidas a indagar y fijar, si fuese posible, la naturaleza o intensidad del mal, además de las precaucionales, que según los accidentes o circunstancias del caso, resultase convenientes.

*Intervención Veterinaria.
Adopción de medidas
profilácticas.*

Art. 282° — Deberá, asimismo, participar todo al gobierno, el cual consultando, si lo hallase a bien, a veterinarios o a peritos, y aun enviándolos al lugar del mal, dictará con arreglo a sus informes o consejos las medidas que a bien se estiman, para cortar y extirpar el mal, y aun hará redactar instrucciones adecuadas, que será del estricto deber de la autoridad local observar.

--

SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL RURAL PERMANENTE

El texto de la ley 16.600, publicada en el Boletín Oficial el 1º de diciembre de 1964, es el siguiente:

Artículo 1º — Implántase con carácter obligatorio y por intermedio de la Caja Nacional de Ahorro Postal, el seguro de vida colectivo para el personal permanente que trabaja en las actividades rurales, comprendido en el Estatuto del Peón y en el régimen jubilatorio establecido por la ley 14.399.

Este seguro cubrirá los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente para el trabajo.

Art. 2º — El capital básico uniforme y obligatorio de este seguro será de treinta mil pesos por persona, pudiendo ser aumentado por el Poder Ejecutivo cuando las circunstancias así lo aconsejaren,

El asegurado podrá optar por un capital adicional dentro de los plazos, condicionales y monto que establezca el decreto reglamentario.

Art. 3º — La obligación patronal de asegurar por el capital básico comenzará a regir:

- a) A partir del 1º de julio del año siguiente a la sanción de la presente ley, al personal que a esa fecha conservare su empleo en relación de dependencia;
- b) A partir del 1º del mes siguiente a su ingreso, al personal que comience a trabajar con posterioridad a la fecha indicada en el inciso anterior.

Art. 4º — El seguro por el capital opcional, comenzará a regir a los 120 días de haber entrado en vigencia el seguro por el capital obligatorio, salvo que el asegurado falleciera por accidente o enfermedad adquirida en el trabajo.

Art. 5º — Las primas de este seguro se abonarán por adelantado en la oportunidad que establezca la reglamentación. El pago de las

correspondientes al capital básico estarán a cargo del empleador y las del capital adicional a cargo del asegurado.

Art. 6º — El asegurado podrá designar libremente el beneficiario del seguro. Cuando no lo hubiere hecho o cuando el designado falleciere antes que el asegurado, el importe del seguro —que se liquidará como bien ganancial—, se abonará a los herederos legales del asegurado en el orden y proporción que establece el Código Civil, pudiendo justificarse ante el asegurador el derecho de quienes reclamen el pago del seguro, de acuerdo con los requisitos que establezca la reglamentación.

Si existieren herederos o beneficiarios menores de edad, el padre o madre de ellos en ejercicio de la patria potestad, están autorizados a percibir el importe respectivo. Los menores de edad emancipados por matrimonio podrán dar recibos por su parte, cualquiera sea su importe.

Art. 7º — El personal asegurado que se jubile continuará asegurado, salvo manifestación expresa en contrario. Las primas en estos casos estarán exclusivamente a cargo de los asegurados, debiendo ser retenidas por la caja que acuerde la prestación.

Art. 8º — Los empleadores rurales podrán también incorporarse a la presente ley, en las condiciones que determine la reglamentación.

Art. 9º — El capital básico de los asegurados a la fecha de vigencia de los nuevos importes que establezca el Poder Ejecutivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º, quedará elevado automáticamente al monto que en cada caso fije como capital obligatorio.

Art. 10º — Fíjase en diez años el término para la prescripción de los actores derivadas de los siniestros que ocurran bajo el régimen de esta ley, rigiendo a su respecto lo que dispone el Código Civil sobre casos de suspensión o interrupción.

Art. 11º — El incumplimiento del empleador lo hará responsable:

- a) Por el importe del seguro obligatorio, cuando no incorpore su personal al seguro;
- b) Por el importe total del seguro contratado, cuando produzca la exclusión del asegurado, de tal modo que al ocurrir el siniestro el beneficiario, o los derecho-habientes del asegurado no perciban el importe del seguro.

Art. 12º — El Poder Ejecutivo al reglamentar la ley fijará el máximo de la prima y demás condiciones correspondientes a este plan de seguro.

Art. 13º — El asegurador entregará a cada asegurado un certificado en el que conste su adhesión al seguro instituido por la presente ley.

Art. 14º — Las cuestiones no previstas en esta ley serán regidas por las disposiciones del Código de Comercio y demás prescripciones legales y reglamentarias de aplicación al seguro.

Ministerio de Educación y Justicia

PROGRAMA NACIONAL INTENSIVO DE ALFABETIZACION
Y EDUCACION DE ADULTOS

Créase la Junta Nacional de Administración y se le fijan sus atribuciones y funciones.

DECRETO N° 4.552. — Bs. As. 10/6/65.

VISTO las disposiciones de la Ley 16.662 de presupuesto general de la Administración Nacional y de los decretos N° 8.722 del 30 de octubre de 1964, N° 2.713 del 9 de abril de 1965 y N° 2.754 del 12 de abril de 1965 y

CONSIDERANDO:

Que es necesario adoptar las previsiones que posibiliten la ejecución de las tareas tendientes a concretar el cumplimiento del Programa aprobado por el Decreto N° 2.754 del 12 de abril de 1965;

Que a tales fines deben crearse las estructuras básicas que organizarán, coordinarán y supervisarán la acción alfabetizadora a cumplirse en todo el ámbito del país;

Que, asimismo, deben determinarse las funciones esenciales que corresponderán a cada uno de los organismos que se crean por el presente decreto, con el objeto de alcanzar los fines propuestos;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, DECRETA:

Artículo 1° — Créase la Junta Nacional de Administración del Programa Nacional Intensivo de Alfabetización y Educación de Adultos la cual dependerá directamente de la Comisión Nacional de Alfabetización y Edificación Escolar, bajo cuya orientación tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las tareas destinadas al desarrollo y cumplimiento del programa, etapas y calendario aprobado por Decreto nú-

mero 2.754 del 12 de abril de 1965 y que forma parte integrante del presente decreto como Anexo 1.

Art. 2º — La Junta estará integrada por un representante de cada uno de los organismos que intervinieron en la acción alfabetizadora, a saber: Ministerio de Educación y Justicia; Secretaría de Guerra; Consejo Nacional de Educación y Consejo Nacional de Educación Técnica y por un Secretario General Administrativo, nombrado directamente por la Comisión Nacional.

Art. 3º — La Junta Nacional de Administración a los efectos del cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

- a) Autorizará la creación y funcionamiento de las Juntas de Administración de la Capital Federal, Provincias y Territorio Nacional de tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, con los representantes propuestos por los organismos técnicos citados en el artículo 2º y por el gobierno local respectivo.
- b) Propondrá a la Comisión Nacional el programa anual de acción alfabetizadora e informará mensualmente sobre su desarrollo de acuerdo con las orientaciones educativas que en materia de Alfabetización y Educación de Adultos establezca dicha Comisión Nacional.
- c) Organizará y coordinará la ejecución y supervisión de la acción alfabetizadora que se cumplirá a través de los cauces naturales con que cuenta cada uno de los organismos participantes en este Programa y el gobierno local respectivo. En la Capital Federal el desarrollo del programa estará a cargo de la Junta respectiva que se integrará con representantes de los organismos naturales y un delegado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
- d) Autorizará y aprobará la creación y funcionamiento de los Centros de Alfabetización a propuesta de las Juntas de Administración jurisdiccionales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8º y su planilla anexa Nº 2, del presente decreto.
- e) Promoverá la cooperación y la adhesión al Programa de todos los sectores de la comunidad nacional y solicitará la colaboración de instituciones o personas con fines de consulta y asesoramiento.
- f) Propondrá a la Comisión Nacional las formas de intercambio de información y de recíproca cooperación con los organismos internacionales a los cuales el país está oficialmente vinculado.

- g) La Junta Nacional de Administración dictará la reglamentación interna que rija su funcionamiento y el de los organismos que de ella dependan, la que será aprobada por la Comisión Nacional.

Art. 4º — La Presidencia de la Junta Nacional será ejercida por el Secretario General Administrativo en su carácter de representante directo de la Comisión Nacional a cuyos efectos:

- a) Será el responsable directo del funcionamiento de los organismos que integran la Junta Nacional de Administración y del cumplimiento de las obligaciones del personal afectado y el depositario de los bienes destinados al programa debiendo firmar todos los documentos que emanen de la Junta, sin cuyo requisito los mismos carecerán de validez.
- b) Elaborará y elevará a la Comisión Nacional el presupuesto de gastos para el desarrollo anual del Programa, prestándole su asesoramiento y colaboración a tales fines, la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación y Justicia.
- c) Será reemplazado, en caso de ausencia o impedimento total o parcial, por el funcionario que a tales efectos designe la Comisión Nacional.

Art. 5º — A los efectos de la elaboración de los aspectos científico-pedagógicos necesarios para el desarrollo del Programa, funcionará un Comité Técnico bajo la dirección de un coordinador designado por la Junta Nacional de Administración y que actuará en dependencia directa de la Junta. El Comité atenderá, básicamente, los siguientes aspectos:

- a) Programación y evaluación.
- b) Promoción e información.
- c) Selección y capacitación del personal.
- d) Preparación de recursos pedagógicos y de las normas didácticas correspondientes.
- e) Analizar la necesidad de creación de otras áreas de estudio y sugerirlas a la Junta Nacional de Administración.

Art. 6º — Las Juntas de Administración de Capital Federal, Provincias y del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud dependerán de la Junta Nacional y serán las responsables de la marcha del Programa a nivel local.

Estarán constituidas en la forma señalada en el inciso a) del artículo 3º y les corresponderá:

- a) Organizar y dirigir la tarea alfabetizadora en sus respectivas jurisdicciones.
- b) Coordinar la acción de las instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas.
- c) Proponer la creación y funcionamiento de los Centros de Alfabetización y Educación de Adultos.

Art. 7º — Facúltase a la Junta Nacional de Administración para la creación de los Centros de Alfabetización y Educación de Adultos a los fines del cumplimiento de la tarea alfabetizadora, siendo atribución de la Junta Nacional determinar las condiciones que deberán reunir y aprobar su funcionamiento.

Art. 8º — La Junta Nacional de Administración y las Juntas de Administración de la Capital Federal y Provincias podrán proponer la contratación de personal docente, técnico y administrativo para su normal funcionamiento, según se detalla en el anexo 2 del presente decreto, dejándose establecido que dichas contrataciones serán por el período de tiempo necesario para la ejecución del programa.

Art. 9º — La coordinación, ejecución, supervisión y contralor de las tareas contables, patrimoniales y de manejo de fondos serán cumplidas, de conformidad con las normas de la Ley de Contabilidad y disposiciones complementarias por la Inspección General Administrativa de la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación y Justicia, mediante la intervención directa, conjunta e indistinta, del Inspector General Administrativo y del Subinspector General Administrativo de la citada Dirección General.

Art. 10º — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educación y Justicia y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 11º — Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Carlos R. S. Alconada Aramburú. — Juan C. Pugliese. — Alfredo Concepción.

PREVISIONES Y DETALLE (ANEXO 2) DE CONTRATOS DE PERSONAL DOCENTE TECNICO Y ADMINISTRATIVO (Art. 8)

	Docente	Técnico	Administrativo
Junta Nacional de Administración .	—	40	40
Junta de Administración de la Capital Federal	2.000	10	100 (1)
Juntas de Administración de las Provincias (cifra global)	20.000 (2)	100	1.000 (1)

PROGRAMA NACIONAL INTENSIVO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS 1964-1968

Antecedentes

Según un informe de la Cámara Nacional Electoral, el padrón electoral de la República, con datos actualizados al 30 de junio de 1964 comprende a 11.951.895 ciudadanos de los cuales 1.151.583, o sea un 9,63 %, son analfabetos.

Las cifras consideradas por jurisdicciones políticas, relevan situaciones de diversa gravedad. Mientras en la Capital Federal el porcentaje de analfabetos representa el 1,23 % del total de ciudadanos inscriptos en dicha jurisdicción, en cuatro provincias el analfabetismo supera el 20 % del total de la población inscripta en las circunscripciones respectivas. En una de esas cuatro provincias, el porcentaje de ciudadanos analfabetos se eleva a casi el 30 por ciento.

En la muestra del Censo revelado por la Dirección de Estadística y Censos de la Nación de 1960, para la población de 14 años y más los porcentajes son más bajos que los del registro electoral, lo que puede resultar de un área mucho más amplia de población, área que

(1) Estas cifras estimativas prevén la afectación de agentes administrativos para las Juntas de Capital Federal y Provincias y para aquellos centros que por el número de analfabetos lo requieran.

(2) Esta cifra global incluye al máximo total de personal docente alfabetizador que será distribuido de acuerdo con las necesidades locales y dentro de las facultades previstas en el inciso d) del artículo 3º del presente decreto.

Las cifras consignadas en el presente anexo deben considerarse como límite máximo de agentes a contratar.

incluye edades más jóvenes y, por tanto, con mayor índice de personas escolarizadas. En efecto, 1.221.420 analfabetos, según el censo de 1960 (sobre una población total de casi 20 millones de habitantes), un 21 % de analfabetos estaría comprendido entre los 14 y 29 años de edad, el 31 % entre los 30 y 49 años y el resto, un 47 % entre la población de edades más altas, lo que confirma la influencia positiva de una matrícula constantemente alta en los últimos años (alrededor del 88 % de la población en edad escolar). Para el citado año el porcentaje de analfabetos para todo el país fue de 8,6 %.

Los datos provenientes de las dos fuentes mencionadas no son comparables pero cada una por sí señala la dimensión de una falla en los niveles culturales de la sociedad argentina. Un sector apreciable de sus habitantes no ha recibido educación o la ha recibido por tan breve tiempo que no ha alcanzado a consolidarse, ni siquiera como instrumento de comunicación, ni de destreza para las operaciones matemáticas más simples. Al total de la población analfabeta cabe agregar, en efecto, el grupo que asistió a la escuela pero que la abandonó con dos o tres años de escolaridad, al promediar la escuela primaria. Este último grupo se estima para los años recientes en un 35 % de la población matriculada y puede presumirse que configura una porción de población semianalfabeta o analfabeta por desuso, en virtud de los pocos años de escolaridad sistemática que recibió. Ambas situaciones —la del analfabetismo absoluto y la del semianalfabetismo— contradicen la igualdad de oportunidades que la Constitución Nacional y las leyes de la República aseguran a sus habitantes y atentan contra la cohesión espiritual en que se fundamenta su ejercicio.

Justificación del Programa:

El analfabetismo constituye un problema universal de máxima gravedad ante las exigencias de participación individual en la sociedad democrática y los acelerados procesos de cambio que se registran en el mundo actual. La República Argentina no escapa a esa situación. No obstante, la temprana difusión de su educación primaria y la amplitud de sus servicios escolares, los datos correspondientes al período 1958-1962 evidencian que, en general, para la mayoría de las provincias se registra un pequeño aumento del número absoluto de analfabetos (C. F. I.) “Analfabetismo en la República Argentina”. En todo caso, el estancamiento es evidente y obliga a revisar, por

una parte, las causas que limitan el pleno rendimiento y efectividad de la educación primaria, y a buscar las fórmulas para un aumento de su productividad y por otra, a iniciar sin demora un programa nacional intensivo de alfabetización, educación de adultos y promoción socio-cultural tendiente a disminuir o a eliminar, si fuera posible, el número actual de analfabetos.

Están dadas en el país las condiciones básicas para llevar adelante un programa de esta naturaleza y propósitos: primero, por la decisión del Supremo Gobierno de la Nación de dar prioridad a la educación y a la salud del pueblo; segundo, por la existencia de un plan económico-social de desenvolvimiento originado en el Consejo Nacional de Desarrollo, que requiere para su cumplimiento adecuados niveles educativos y la máxima utilización de recursos humanos calificados; tercero, en virtud de la actual política educativa nacional en favor de un mayor rendimiento del sistema escolar y una expansión más racional de los servicios sobre la base de planes de construcciones escolares, de asistencialidad integral al escolar y de perfeccionamiento masivo y continuo del personal docente. Se trata de un hondo problema social que a la par que evidencia el descuido moral y espiritual del hombre, incide desfavorablemente en la evolución y desarrollo del país. De ahí que a su solución deben concurrir los distintos sectores de la actividad nacional.

Objetivos del Programa

1. — Cumplir con carácter de prioridad nacional y por término de cuatro años un programa intensivo de Alfabetización y Educación de Adultos que reduzca al mínimo las actuales tasas de analfabetismo que afectan al país.

2. — Contribuir de manera efectiva a la Campaña Universal contra el Analfabetismo aprobada por Resolución de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1963, y auspiciada en su realización por la UNESCO.

A fin de dar significación y plena vigencia a estos objetivos se vigorizará además el sistema escolar actual para evitar y eliminar el ausentismo y la deserción escolar. Se pretende atacar el mal en sus raíces corrigiendo y superando las causas que crearon este hecho social de tanta trascendencia, sin descuidar el futuro, a través de un adecuado sistema de escolaridad que impida se mantengan las condiciones que hicieron posible tan penosa situación.

Criterios Básicos para la Ejecución del Programa

La acción debe ser rigurosa y científicamente planeada en su orientación, operatividad y recursos, a fin de obtener resultados tangibles en el plazo más breve.

El nombre dado al programa anticipa cuál ha de ser su sentido y orientación: instaurar una etapa alfabetizadora inicial e intensiva, acompañada y seguida de una etapa de educación sistemática que permita a los adultos, especialmente a los más jóvenes, concluir, si fuera posible, los estudios de educación primaria.

La acción alfabetizadora debe estar precedida de incentivos y de motivaciones que conduzcan a los individuos a “Querer” aprender. El aprendizaje adquiere entonces su verdadera significación ya que es sentido como una necesidad propia y personal.

Todo el programa habrá de inspirarse pues, en una concepción educativa integral que se funde en la psicología de los adultos y se relacione con sus intereses vitales y ocupacionales y también con su papel de ciudadanos dentro de una sociedad democrática.

El programa se proyectará fundamentalmente hacia los sectores bien definidos de población: la que se concentra en los alrededores de la Capital Federal y en grandes ciudades del interior y la de los medios rurales.

Los centros alfabetizadores más numerosos, los que cubren toda la extensión de la República, aun en sus zonas más alejadas y difíciles, son las escuelas primarias. Una acción de auténtico alcance nacional debe encauzarse a través del sistema ya establecido, el que cuenta con docentes, local mobiliario y elementales recursos didácticos. Estos canales naturales constituyen una garantía que se utilizará al máximo, una capacidad física ya instalada y la idoneidad profesional-docente de los maestros en ejercicio, evitando la creación de una nueva y costosa red de servicios. El sistema vigente de educación primaria constituirá, pues, el vehículo más importante y el centro de la acción alfabetizadora, la que podría compensarse mediante remuneraciones previstas por la Ley 14.473 y otras formas de estímulo para el personal docente. En cuanto a los recursos e instrumentos de alfabetización y educación de adultos corresponderá enriquecer la acción directa con los medios modernos de comunicación de masas —radio, cine, televisión, periodismo, etc.— y dinamizar así el proceso de recuperación para quienes no recibieron educación sistemática.

La acción a través de los maestros de escuelas primarias tendría que estar acompañada de todas aquellas otras acciones concurrentes que se estimen útiles; inclusive la acción individual de una persona escolarizada hacia otra que no la estuviera. Si bien habrá que crear instrumentos especiales de alfabetización —cartillas, guías para alfabetizadores, carteles murales, cintas fijas, etc. y ofrecer una preparación adecuada para el uso de esos instrumentos; ni los métodos ni los recursos serán rígidos o exclusivos. Estos se fundarán en la idoneidad y espíritu de iniciativa de los maestros.

La heterogeneidad geográfica y social del país, las peculiaridades que presentan los distintos grados de analfabetismo y la diversidad de intereses de los individuos que recibirán la acción, han de exigir una política flexible, dinámica y de fácil adaptación a las diversidades anotadas. El programa nacional de alfabetización deberá contar con zonas declaradas experimentales, a fin de aplicar en ellas una acción concertada de todas las jurisdicciones, para realizar estudios en investigaciones sobre métodos y recursos de enseñanza y poder evaluar paso a paso el proceso del programa. El ejército concurrirá a través de su acción al logro de los fines previstos, ya que está en condiciones de poner a disposición del Programa valiosos recursos humanos y materiales que facilitarán la ejecución del plan propuesto.

El analfabetismo es una situación de emergencia nacional. La gravedad del problema exige a todos los sectores del país sus esfuerzos para superarlo.

Etapas y Calendario

Primera Etapa

1. —Preparación: hasta el 30 de abril de 1965.
2. — Ejecución: del 1º de mayo al 24 de octubre de 1965.
3. — Evaluación: noviembre de 1965.

Segunda Etapa

Según sean los resultados obtenidos de la evaluación de la primera etapa se reestructurará el programa para 1966 teniendo en cuenta el grupo ya alfabetizado que debe continuar su preparación y los grupos nuevos que se incorporen a la campaña. Si bien se ha previsto un lapso total de cuatro años para la acción intensiva, ese lapso deberá reajustarse conforme con el ritmo en que se alcancen las metas propuestas inicialmente.

Estímulos

El programa expuesto ha de necesitar de un sistema amplio de incentivos que alcancen tanto a la persona que pruebe haber sido alfabetizada como a las que de una manera u otra acrediten labor alfabetizadora. Estos incentivos pueden ser, entre otros: Para la persona que se alfabetiza:

1. — Posesión de una libreta de Alfabetización que será de presentación obligatoria para la incorporación a los servicios del Estado.

2. — Bonificación en el sueldo del personal que acredite haber sido alfabetizado y que los dos años conserve su condición de persona escolarizada.

3. — Criterios privados de donación para el personal que se alfabetiza dentro del período de duración del programa intensivo; entrega de libretas de ahorro postal, títulos de capitalización, cuota inicial para la adquisición de la vivienda propia, etc.

Para los alfabetizadores:

1. — Se otorgará una calificación especial a los normalistas y otros estudiantes que prueben haber colaborado en la acción alfabetizadora.

2. — Se extenderá título de reconocimiento en tareas de bien público a toda persona que acredite haber alfabetizado a un grupo de personas por año.

Cooperación Nacional

Se auspiciarán medidas legislativas nacionales y provinciales, por medio de las cuales los empresarios provean los medios que posibiliten a los adultos no escolarizados a iniciar o a continuar estudios.

Se concitará en torno al Programa de Alfabetización el interés y la preocupación del mayor número de habitantes de la Nación.

Cooperación Internacional

1. — Se concederán becas para estudios de técnicas de alfabetización y educación de adultos.

2. — Se prestará ayuda técnica y financiera para programas regionales de experimentación o para preparación de personal al servicio de la campaña.

Las ayudas antes anotadas podrán gestionarse ante UNESCO, Fondo Especial de U. N.; UNICEF; OEA y OEI.

PROGRAMA NACIONAL INTENSIVO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS

Plan de Acción para 1965

Para desarrollar la primera etapa del programa, durante el año 1965, se llevarán a cabo las siguientes actividades que configuran el Plan de Acción.

1. — Se organizará y desarrollará una intensa promoción pública con fines a:

a) Lograr una colaboración efectiva que se traduzca en:

—Cooperación personal (incluso alfabetizadores voluntarios y ayuda material o financiera).

b) Interesar a los individuos por acrecentar su nivel cultural.

2º — Se preparan las especificaciones sobre aspectos e intensidad de la acción alfabetizadora y su relación con la escuela primaria, por una parte, y con la escuela de adultos, por otra.

3º — Se determinarán las normas educativas a las que deberá ceñirse la acción alfabetizadora y las condiciones de promoción para considerar que un individuo está alfabetizado.

4º — Se seleccionarán los materiales y se especificarán sus características indispensables para esta primera etapa del programa: carteles, cartillas, libro inicial, periódicos, etc.

5º — Se nombrarán las delegaciones en provincia y los grupos locales.

6º — Se realizará la coordinación con las autoridades nacionales, provinciales e instituciones y empresas, necesarias para el cumplimiento de la acción alfabetizadora.

7º — Se fijarán las condiciones de trabajo, de idoneidad profesional del personal y el término de la función.

8º — Se seleccionarán y localizarán centros de alfabetización en las provincias y regiones elegidas según las necesidades que resulten de una investigación socio-económica.

9º — Se ejecutará la acción alfabetizadora.

—Inscripción de analfabetos.

—Instalación de centros alfabetizadores (locales y designación del personal).

—Enseñanza.

10º — Se realizará la evaluación.

"IMPRENTA CRISOL S. R. L."
Canning 1671 - Buenos Aires